

Edición
en lengua española

Comunicaciones e informaciones

<u>Número de información</u>	Sumario	Página
	<i>I Comunicaciones</i>	
	Comisión	
2002/C 222/01	Tipo de cambio del euro	1
2002/C 222/02	Ayudas estatales — Bélgica — Ayuda C 31/2002 (ex N 149/2000) — Régimen transitorio del mercado de la electricidad de coordinación — Invitación a presentar observaciones, en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE ⁽¹⁾	2
2002/C 222/03	Ayudas estatales — España — Ayuda C 50/02 (ex N 373/2001) — Ayudas a las organizaciones de productores de aceite de oliva — Invitación a presentar observaciones, en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE	18
2002/C 222/04	Ayudas estatales — Francia — Ayuda C 55/2002 (ex NN 53/2002) — Ayuda al astillero de reparaciones Soreni (Astilleros) — Invitación a presentar observaciones, en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE ⁽¹⁾	21
2002/C 222/05	Notificación previa de una operación de concentración (asunto COMP/M.2897 — SITA SA/Sydskraft y SITA Sverige AB/Ecoplus) ⁽¹⁾	25
2002/C 222/06	No oposición a una concentración notificada (Asunto COMP/M.2863 — Morgan Stanley/Olivetti/Telecom Italia/Tiglio) ⁽¹⁾	26
2002/C 222/07	No oposición a una concentración notificada (Asunto COMP/M.2936 — TMI/Darfon/JV) ⁽¹⁾	26
2002/C 222/08	No oposición a una concentración notificada (Asunto COMP/M.2937 — Questor Bermuda/Teksid) ⁽¹⁾	27

II Actos jurídicos preparatorios

.....

Número de información

Sumario (*continuación*)

Página

III *Informaciones*

Comisión

2002/C 222/09	Concurso convocado por la República Helénica de conformidad con la letra d) del apartado 1 del artículo 4 del Reglamento (CEE) n° 2408/92 del Consejo para la explotación de servicios aéreos regulares sujetos a obligaciones de servicio público 28
2002/C 222/10	Explotación de servicios aéreos regulares — Concurso convocado por la República Helénica de conformidad con la letra d) del apartado 1 del artículo 4 del Reglamento (CEE) n° 2408/92 del Consejo para la explotación de servicios aéreos regulares sujetos a obligaciones de servicio público ⁽¹⁾ 30

I

(Comunicaciones)

COMISIÓN

Tipo de cambio del euro ⁽¹⁾

17 de septiembre de 2002

(2002/C 222/01)

1 euro =

Moneda			Moneda		
		Tipo de cambio			Tipo de cambio
USD	dólar estadounidense	0,9649	LVL	lats letón	0,5868
JPY	yen japonés	118,64	MTL	lira maltesa	0,4122
DKK	corona danesa	7,4273	PLN	zloty polaco	4,028
GBP	libra esterlina	0,6297	ROL	leu rumano	32065
SEK	corona sueca	9,0978	SIT	tólar esloveno	228,2132
CHF	franco suizo	1,4717	SKK	corona eslovaca	43,386
ISK	corona islandesa	85,25	TRL	lira turca	1612000
NOK	corona noruega	7,356	AUD	dólar australiano	1,7683
BGN	lev búlgaro	1,9461	CAD	dólar canadiense	1,5217
CYP	libra chipriota	0,5732	HKD	dólar de Hong Kong	7,5257
CZK	corona checa	30,38	NZD	dólar neozelandés	2,06
EEK	corona estonia	15,6466	SGD	dólar de Singapur	1,7189
HUF	forint húngaro	243,27	KRW	won de Corea del Sur	1175,92
LTL	litas lituana	3,4524	ZAR	rand sudafricano	10,2747

⁽¹⁾ Fuente: tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central Europeo.

AYUDAS ESTATALES — BÉLGICA**Ayuda C 31/2002 (ex N 149/2000) — Régimen transitorio del mercado de la electricidad de coordinación****Invitación a presentar observaciones, en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE**

(2002/C 222/02)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

Por carta de 24 de abril de 2002, reproducida en la versión lingüística auténtica en las páginas siguientes al presente resumen, la Comisión notificó a Bélgica su decisión de incoar el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE en relación con la medida antes citada.

Las partes interesadas podrán presentar sus observaciones sobre las medidas respecto de las cuales la Comisión ha incoado el procedimiento, en un plazo de un mes a partir de la fecha de publicación del presente resumen y de la carta siguiente, enviándolas a:

Comisión Europea
Dirección General de Competencia
Dirección Ayudas estatales I — Unidad G2
B-1049 Bruxelles/Brussel
Fax (32-2) 296 98 14/296 12 42.

Dichas observaciones serán comunicadas a Bélgica. La parte interesada que presente observaciones podrá solicitar por escrito, exponiendo los motivos de su solicitud, que su identidad sea tratada confidencialmente.

RESUMEN**1. PROCEDIMIENTO**

Las autoridades belgas notificaron a la Comisión los dispositivos establecidos por la ley de 29 de abril de 1999, relativa a la organización del mercado de la electricidad con el nombre de «Régimen transitorio del mercado de la electricidad» (en lo sucesivo denominado «la medida») por carta de 18 de octubre de 1999, registrada por la Comisión el 19 de noviembre de 1999.

Las autoridades belgas transmitieron en sucesivas ocasiones información complementaria sobre el expediente, la última vez por correo con fecha de 26 de febrero de 2002, y registrado por la Comisión el 28 de febrero de 2002.

2. DESCRIPCIÓN DE LA AYUDA

Se trata de un dispositivo destinado, según las autoridades belgas, a compensar el impacto financiero de compromisos que los productores y distribuidores de electricidad belgas hubieran tomado o les hubieran sido impuestos cuando el mercado de la electricidad estaba regulado y que la liberalización de este mercado debido a la entrada en vigor de la Directiva 96/92/CE, pondría en peligro el respeto de dichos compromisos.

El dispositivo incluye tres aspectos, relativos respectivamente al desmantelamiento de los centros nucleares experimentales, al

régimen de pensiones de los agentes del sector de la electricidad y al fomento de las energías renovables y del uso racional de la energía.

— La Comisión ha concluido que el aspecto de la medida relativo al desmantelamiento de los centros nucleares experimentales, en el caso de que constituyera una ayuda estatal en virtud del apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE, sería compatible con la excepción de la letra c) del apartado 3 del artículo 87 de dicho Tratado. Por consiguiente, este aspecto no será debatido en el presente resumen.

— El aspecto relativo a la financiación de las pensiones de los agentes del sector de la electricidad tiene por objeto la compensación por el Estado de la carga a soportar por Electrabel y SPE a causa de las insuficientes provisiones que estas empresas realizaron anteriormente para garantizar la transición de la financiación de las pensiones de sus agentes de un régimen distributivo a un régimen de capitalización.

El importe máximo de las compensaciones es de 752 millones de euros para Electrabel y de 32 millones de euros para SPE, aproximadamente.

— La Comisión concluyó que el aspecto de la medida relativa al fomento de las energías renovables y del uso racional de la energía no incluía ayuda estatal, según lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE. Por consiguiente, este aspecto no se trata en el presente resumen.

3. VALORACIÓN

Las autoridades belgas no comunicaron el método de financiación de los dos primeros aspectos de la medida. La Comisión no puede excluir que este método de financiación incluye un elemento de ayuda estatal según lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE. Partiendo de esta hipótesis, la Comisión analizó el proyecto teniendo en cuenta la Comunicación de la Comisión relativa a la metodología de análisis de las ayudas estatales vinculadas a costes de transición a la competencia ⁽¹⁾ (en lo sucesivo denominada «la metodología»).

Este análisis condujo la Comisión a expresar las dudas siguientes relativas a la compatibilidad del aspecto de la medida relativo a las pensiones de los agentes del sector de la electricidad con los criterios de la metodología.

En primer lugar y en términos generales, la Comisión plantea sus dudas sobre si los costes relacionados con este aspecto constituyen costes de transición a la competencia de acuerdo con la metodología, en la medida en que resulta difícil identificar a qué compromiso o garantía de explotación específicos de las empresas Electrabel y SPE se refieren.

Por otra parte, la Comisión tiene también dudas sobre el hecho de que la duración del pago de las compensaciones relacionadas con este aspecto sea compatible con el punto 3.12 de la metodología, que el método de pago de las compensaciones tenga en cuenta la evolución futura de la competencia de manera compatible con el punto 4.2. de la metodología y que el importe máximo de las compensaciones que deben pagarse tenga en cuenta los posibles aumentos de productividad para las empresas, de manera compatible con el punto 4.5 de la metodología.

4. CONCLUSIÓN

Habida cuenta de las consideraciones expuestas, la Comisión invitó al Reino de Bélgica, en el marco del procedimiento del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE, a presentar sus observaciones y a facilitar toda la información pertinente para la evaluación de este proyecto. En particular, la Comisión ha instado a las autoridades belgas a que le proporcionen información sobre el método de financiación de la medida, los motivos por los cuales el aspecto de la medida sobre las pensiones de los agentes del sector de la electricidad contempla un coste de transición a la competencia subvencionable de acuerdo con la metodología, la justificación del método de cálculo de las compensaciones de los costes de transición a la competencia, la duración del pago de estas compensaciones, su ajuste a las condiciones reales del mercado de la electricidad y el método de consideración de los posibles aumentos de productividad de las empresas beneficiarias.

CARTA

«Met dit schrijven stelt de Commissie België ervan in kennis, dat zij na onderzoek van de door de Belgische autoriteiten met

betrekking tot de bovengenoemde maatregel (hierna: „de regeling”) besloten heeft:

- geen bezwaar te maken tegen het onderdeel van de regeling dat betrekking heeft op de ontmanteling van nucleaire-onderzoeklocaties omdat, zelfs in de aanname dat dit onderdeel van de regeling staatssteun zou vormen in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag, dit onderdeel van de regeling in aanmerking komt voor de afwijking uit artikel 87, lid 3, onder c), van het Verdrag;
- de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag in te leiden ten aanzien van het onderdeel van de regeling dat de pensioenen van werknemers uit de elektriciteitssector betreft;
- het onderdeel van de regeling betreffende de bevordering van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en het rationeel energiegebruik niet als staatssteun in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag te beschouwen.

1. PROCEDURE

Op 19 december 1996 werd Richtlijn 96/92/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit ⁽²⁾ aangenomen. In deze richtlijn worden gemeenschappelijke regels vastgesteld voor de productie, de transmissie en de distributie van elektriciteit. De richtlijn regelt de wijze van organisatie en de werking van de elektriciteitssector, de toegang tot de markt, de criteria en procedures die gelden voor de aanbestedingen, de verlening van vergunningen en de exploitatie van de netten.

De lidstaten dienden de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking te doen treden om uiterlijk op 19 februari 1999 aan de richtlijn te voldoen; ook dienden zij de Commissie onverwijld daarvan in kennis te stellen. België, Griekenland en Ierland konden beschikken over een aanvullend uitstel van, onderscheidenlijk, één jaar, twee jaren en één jaar.

Volgens artikel 24 van de richtlijn kunnen de lidstaten, waar de voor de inwerkingtreding van deze richtlijn verleende vergunningen verplichtingen of garanties inzake werking inhouden die eventueel niet kunnen worden nagekomen vanwege de bepalingen van de richtlijn, verzoeken om in aanmerking te komen voor een overgangsregeling. Deze overgangsregeling moet van beperkte duur zijn en kan betrekking hebben op ontheffingen voor de hoofdstukken IV, VI en VII van de richtlijn. Evenzo kunnen de lidstaten die na de inwerkingtreding van deze richtlijn kunnen aantonen dat er zich wezenlijke problemen voordoen voor de werking van hun kleine geïsoleerde netten, om ontheffingen vragen voor de desbetreffende bepalingen uit de hoofdstukken IV, V, VI en VII van de richtlijn. Aanvragen voor een overgangsregeling of voor ontheffingen moeten worden aangemeld bij de Commissie die deze al dan niet kan toestaan.

⁽¹⁾ Adoptada por la Comisión el 26 de julio de 2001. Disponible en el sitio Internet de la Dirección General de Competencia de la Comisión en la siguiente dirección electrónica:
http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/legislation/aid3.html#electricity

⁽²⁾ PB L 27 van 30.1.1997, blz. 20.

Bij schrijven van 18 oktober 1999 hebben de Belgische autoriteiten de bij de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt genomen maatregelen als een overgangsregeling in de zin van artikel 24 van de voornoemde Richtlijn 96/92/EG bij de Commissie aangemeld, onder de benaming „overgangsregeling voor de elektriciteitsmarkt”.

Bij schrijven van 21 december 1999 heeft de Commissie de Belgische autoriteiten meegedeeld dat de overgangsmaatregelen staatssteun vormden in de zin van artikel 87 van het EG-Verdrag en niet in aanmerking kwamen voor een ontheffing voor de hoofdstukken IV, VI en VII van Richtlijn 96/92/EG, en bijgevolg overeenkomstig artikel 88, lid 3, van het EG-Verdrag dienden te worden aangemeld.

Bij schrijven van 10 maart 2000 (door de Commissie op 15 maart 2000 geregistreerd) hebben de Belgische autoriteiten de „overgangsregeling voor de elektriciteitsmarkt”, overeenkomstig artikel 88, lid 3, van het EG-Verdrag, bij de Commissie aangemeld.

Bij schrijven van 3 april 2000 (door de Commissie geregistreerd op 7 april 2000) hebben de Belgische autoriteiten de Commissie een correctie van deze aanmelding doen toekomen.

Bij faxbericht van 13 april 2000 (door de Commissie op 26 april 2000 geregistreerd) hebben de Belgische autoriteiten de Commissie een aanvulling bij de aanmelding gezonden.

Bij schrijven nr. D/51786 van 2 mei 2000 heeft de Commissie de Belgische autoriteiten om aanvullende inlichtingen verzocht. De Belgische autoriteiten hebben deze inlichtingen bij schrijven van 26 mei 2000 (door de Commissie op 29 mei 2000 geregistreerd) gezonden.

Een nieuw verzoek om aanvullende inlichtingen werd de Belgische autoriteiten gezonden bij schrijven nr. D/53517 van 23 juni 2000. De Belgische autoriteiten hebben deze inlichtingen meegedeeld bij schrijven van 28 juli 2000, dat door de Commissie op 2 augustus 2000 werd geregistreerd.

Een nieuw verzoek om aanvullende inlichtingen werd de Belgische autoriteiten gezonden bij schrijven nr. D/54883 van 26 september 2000. De Belgische autoriteiten hebben deze inlichtingen meegedeeld bij schrijven van 16 oktober 2000, dat door de Commissie op 19 oktober 2000 werd geregistreerd.

Een nieuw verzoek om aanvullende inlichtingen werd de Belgische autoriteiten gezonden bij schrijven nr. D/56214 van 18 december 2000. De Belgische autoriteiten hebben deze inlichtingen meegedeeld bij schrijven van 18 januari 2001, dat door de Commissie op 19 januari 2001 werd geregistreerd.

Een nieuw verzoek om aanvullende inlichtingen werd de Belgische autoriteiten gezonden bij schrijven nr. D/55117 van 10 december 2001. De Belgische autoriteiten hebben deze inlichtingen meegedeeld bij schrijven van 14 januari 2002, dat door de Commissie op 17 januari 2002 werd geregistreerd, alsmede bij schrijven van 25 januari 2002, dat op 29 januari 2002 door de Commissie werd geregistreerd.

De Belgische autoriteiten hebben aanvullende inlichtingen over deze regeling meegedeeld bij schrijven van 26 februari 2002, dat door de Commissie op 28 februari 2002 werd geregistreerd.

2. BESCHRIJVING VAN DE REGELING

De regeling dient volgens de Belgische autoriteiten om de financiële gevolgen te compenseren van de verplichtingen die de Belgische elektriciteitsproducenten en -distributeurs zouden hebben aangegaan of die hun zouden zijn opgelegd ten tijde van de geregelende markt, en die zij eventueel niet zouden kunnen nakomen wegens de liberalisatie van deze markt als gevolg van de inwerkingtreding van voormelde Richtlijn 96/92/EG.

De regeling omvat drie delen betreffende, onderscheidenlijk, de ontmanteling van nucleaire-onderzoekslocaties, de pensioenen van werknemers in de elektriciteitssector, en de bevordering van hernieuwbare energiebronnen en het rationeel energiegebruik.

2.1. Het onderdeel betreffende de ontmanteling van de nucleaire-onderzoekslocaties

Het onderzoekscentrum te Mol-Dessel (ook bekend onder de benaming „het SCK”) werd gebruikt voor de uitbouw in België van een elektriciteitsproductie op basis van kernenergie. Deze locatie wordt over het algemeen onderverdeeld in: de zone-BP1, de zone-BP2 en de rest van de zone-Mol-Dessel, die in hoofdzaak de reactor BR3 omvat.

De ontmanteling van deze drie entiteiten is begonnen in 1989 en zou voor sommige daarvan doorgaan tot 2030.

Het respectieve aandeel van de Belgische staat en van de elektriciteitsproducenten in de ontmanteling is vastgelegd in de „Overeenkomst betreffende de oprichting en het beheer van een fonds voor de sanering van nucleaire installaties in de zone-Mol-Dessel” van 19 december 1990 en de bijlagen daarvan, zoals die door de Belgische staat en de elektriciteitsproducenten Electrabel en SPE ondertekend zijn.

In deze overeenkomst is bepaald dat:

- de sanering van de zone-BP1 volledig voor rekening komt van de Belgische staat;
- de sanering van de zone-BP2 volledig voor rekening komt van de producenten ⁽³⁾;
- de sanering van de rest van de zone-Mol-Dessel voor 25 % voor rekening komt van de producenten en voor 75 % voor rekening van de Belgische staat.

Volgens de Belgische autoriteiten hebben deze, door de producenten in het kader van een geregelende markt aangegane verbintenissen, een invloed op hun concurrentievermogen in een toekomstige geliberaliseerde markt. De overgangsregeling voor de elektriciteitsmarkt voorziet in compensaties voor deze verbintenissen.

Het bedrag van deze compensaties komt overeen met de bedragen die door de producenten moeten worden betaald voor de ontmanteling van de zone-BP2 en voor het deel van de zone-Mol-Dessel buiten de zones-BP1 en -BP2. Dit bedrag beloopt maximaal 377,033 miljoen EUR, waarvan 335,276 miljoen EUR voor de werken aan de zone-BP2 en 41,757 miljoen EUR voor de werken in de rest van de zone-Mol-Dessel.

⁽³⁾ Evenwel binnen het plafond dat voor de kosten van deze werken is voorzien.

Van deze compensaties komt 91,5 % voor rekening van Electrabel en 8,5 % voor rekening van SPE.

2.2. Het onderdeel betreffende de pensioenen van werknemers uit de elektriciteitssector

Bij de beëindiging van hun activiteiten ontvangen werknemers in de Belgische elektriciteitssector, of hun rechthebbenden in geval van overlijden, aanvullende middelen bovenop hun wettelijk pensioen (in de openbare sector, worden het wettelijk pensioen en de aanvullende middelen samengevoegd).

De wijze waarop deze aanvullende middelen worden gefinancierd, hangt af van de datum van aanwerving van de werknemers en de datum waarop zij hun activiteiten hebben beëindigd.

Voor de werknemers die vóór 1 januari 1993 zijn aangeworven en die hun activiteiten vóór 1 januari 1993 hebben beëindigd, is de financieringswijze van de aanvullende middelen vastgelegd in het paritair akkoord van 2 mei 1952. Het gaat om financiering via een omslagstelsel, ten laste van de vroegere werkgever.

Voor de werknemers die vóór 1 januari 1993 zijn aangeworven en hun activiteiten nog uitoefenen op 1 januari 1993, is het paritair akkoord van 2 mei 1952 eveneens van toepassing. De standaardfinancieringswijze van de aanvullende middelen is derhalve het omslagstelsel, ten laste van de werkgever. Toch hebben deze werknemers sinds 1993 de mogelijkheid om vrijwillig te kiezen voor een financiering door kapitalisatie, in toepassing van de wet van 9 juli 1975 ⁽⁴⁾. Voor de werknemers die gekozen hebben voor de financiering door kapitalisatie, moet de werkgever het gedeelte betalen van de op het moment van de wijziging van het systeem verkregen rechten.

Voor de werknemers die na 1 januari 1993 zijn aangeworven, is de wet van 9 juli 1975 van toepassing en vormt de kapitalisatie de enige financieringswijze voor de aanvullende middelen.

In de overgangsregeling voor de elektriciteitsmarkt is in compensaties voorzien voor de producenten die via het omslagstelsel pensioenen betalen.

De waarde van de compensaties wordt berekend door, op basis van demografische hypothesen, een raming te maken van het pensioenbedrag dat nog via het omslagstelsel moet worden betaald, te rekenen vanaf de liberalisatie van de elektriciteitsmarkt, en vervolgens dit bedrag te verminderen met de (geactualiseerde) waarde van de op de datum van de liberalisering van de markt met het oog op de betaling van de pensioenen aangelegde voorzieningen.

Het totale bedrag van deze compensaties beloopt zo'n 784 miljoen EUR. Daarvan wordt ongeveer 752 miljoen EUR uitgekeerd aan Electrabel en 32 miljoen EUR aan SPE.

2.3. Het onderdeel betreffende de bevordering van hernieuwbare energiebronnen en het rationeel energiegebruik. In het kader van het uitrustingsplan 1995-2005 en op aanbeveling van het Controlecomité voor de Elektriciteit en het Gas, heeft de Belgische elektriciteitssector drie verbintenissen aangegaan:

- bij de distributie van elektriciteit zou 0,01 BEF per aan de klanten geleverde kWh worden ingehouden en geïnvesteerd worden in de maatregelen ter bevordering van het rationeel energiegebruik welke zijn opgenomen in een plan dat in samenwerking met de Gewesten is uitgewerkt;
- bij de elektriciteitsproductie zou uit eigen middelen een jaarlijks toenemend bedrag (stijgend van 380 miljoen BEF — ongeveer 9,4 miljoen EUR — in 1995 tot 450 miljoen BEF — ongeveer 11,2 miljoen EUR — in 2005) geïnvesteerd worden in een door het Controlecomité voor de Elektriciteit en het Gas goed te keuren plan ter bevordering van groene stroom;
- de elektriciteitssector zou gedurende tien jaar een extratarifaire premie van 1 à 2 BEF/kWh (ongeveer 0,025 tot 0,05 EUR) toekennen ten behoeve van installaties die stroom produceren uit hernieuwbare energiebronnen.

De overgangsregeling voor de elektriciteitsmarkt bevatte aanvankelijk compensaties aan Electrabel en SPE ten bedrage van in totaal zo'n 134 miljoen EUR, gekoppeld aan de drie bovenstaande maatregelen.

Dit voornemen om compensaties uit te keren werd uiteindelijk door de Belgische autoriteiten opgegeven, die de Commissie van dit besluit in kennis gesteld hebben bij schrijven van 26 februari 2002, dat op 28 februari 2002 door de Commissie werd geregistreerd.

3. BEOORDELING VAN DE REGELING

Door de overgangsregeling voor de elektriciteitsmarkt aan te melden hebben de Belgische autoriteiten de verplichtingen die voortvloeien uit artikel 88, lid 3, van het EG-Verdrag en artikel 62, lid 3, van de EER-Overeenkomst, nageleefd.

3.1. De onderdelen van de regeling die op de ontmanteling van nucleaire-onderzoekslocaties en op de pensioenen van de werknemers uit de elektriciteitssector betrekking hebben

3.1.1. De vraag of sprake is van staatssteun in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag

Door de aangemelde regeling wordt erin voorzien dat de staat, in het kader van deze beide onderdelen, aan de ondernemingen Electrabel en SPE subsidies toekent, die — bij een eerste onderzoek — voor deze ondernemingen een voordeel lijken in te houden, waardoor zij hun positie kunnen versterken ten opzichte van andere ondernemingen die eveneens op deze markt actief zijn en die dergelijke subsidies niet ontvangen.

Bovendien is de Commissie in de huidige stand van haar onderzoek van oordeel dat de overgangsregeling voor de elektriciteitsmarkt het handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig kan beïnvloeden, aangezien op de elektriciteitsmarkt handel tussen ondernemingen uit verschillende lidstaten plaats kan vinden, met name sinds bovenvermelde Richtlijn 96/92/EG van kracht werd. Het begunstigen van bepaalde ondernemingen lijkt derhalve gevolgen te kunnen hebben voor het intracommunautaire handelsverkeer en te leiden tot een verstoring van de concurrentie.

⁽⁴⁾ Wet van 9 juli 1975 betreffende de controle op verzekeringsondernemingen, Staatsblad van 29.7.1975, blz. 9 267.

De Belgische autoriteiten gaven er de voorkeur aan om de aanmelding van hun initiële voornemen betreffende de financieringswijze van deze regeling in te trekken. Op grond van de informatie waarover de Commissie thans beschikt, kan zij dus niet uitmaken of de aan Electrabel en SPE toegekende subsidies staatsmiddelen vormen.

Het vrijmaken van staatsmiddelen is een noodzakelijke voorwaarde om een maatregel als staatssteun in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag te kunnen aanmerken.

De Commissie meent derhalve dat zij — in dit stadium van haar onderzoek, en rekening houdend met het feit dat de overgangsregeling voor de elektriciteitsmarkt het handelsverkeer tussen lidstaten kennelijk ongunstig beïnvloedt en de mededinging vervalst of dreigt te vervalsen doordat bepaalde ondernemingen begunstigd worden — niet kan vaststellen of deze regeling staatssteun vormt in de zin van artikel 87, lid 1 van het EG-Verdrag.

3.1.2. Toepasselijkheid van artikel 87, leden 2 en 3, van het EG-Verdrag

Volgens het algemene beginsel uit artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag is staatssteun onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt. Artikel 87, leden 2 en 3, bevat echter bepaalde mogelijkheden om van deze algemene regel af te wijken.

Allereerst is de Commissie — in de huidige stand van haar onderzoek — van oordeel dat de overgangsregeling voor de elektriciteitsmarkt geen steunmaatregel van sociale aard is ten behoeve van individuele verbruikers, noch steun vormt tot herstel van de schade veroorzaakt door natuurrampen of andere buitengewone gebeurtenissen. Evenmin gaat het om steunmaatregelen aan de economie van bepaalde streken van de Bondsrepubliek Duitsland die nadeel ondervinden van de deling van Duitsland. De eventueel uit de overgangsregeling voor de elektriciteitsmarkt voortvloeiende staatssteun lijkt dus geen aanspraak te kunnen maken op de afwijkingen uit artikel 87, lid 2, van het EG-Verdrag.

Voorts meent de Commissie — in dit stadium van haar onderzoek — dat de overgangsregeling voor de elektriciteitsmarkt niet bestemd is voor de economische ontwikkeling van achtergestelde regio's, noch voor de verwezenlijking van een belangrijk project van gemeenschappelijk Europees belang of ter bevordering van de cultuur of de instandhouding van het culturele erfgoed. De eventueel uit deze regeling voortvloeiende staatssteun lijkt dus evenmin aanspraak te kunnen maken op de afwijkingen uit artikel 87, lid 2, onder a), b) en d), van het EG-Verdrag.

De enige afwijking die in het huidige geval eventueel van toepassing zou kunnen zijn, lijkt dus die uit artikel 87, lid 3, onder c), te zijn.

Volgens de Commissie kan de afwijking uit artikel 87, lid 3, onder c), onder bepaalde voorwaarden van toepassing zijn op steun die bestemd is voor de dekking van „gestrande kosten”, d.w.z. de kosten voor verplichtingen of garanties voor de werking die in gevaar kunnen komen door de liberalisatie van de elektriciteitssector.

Dergelijke steun draagt immers bij tot de ontwikkeling van de elektriciteitssector door het bevorderen van de overschakeling van een grotendeels gesloten naar een gedeeltelijk geliberaliseerde markt ⁽⁵⁾. Indien de door deze maatregelen veroorzaakte concurrentiedistorsies in tijd en omvang beperkt zijn, kan de Commissie deze beschouwen als maatregelen die de voorwaarden inzake het handelsverkeer niet zodanig veranderen dat het gemeenschappelijk belang erdoor wordt geschaad — en kunnen ze dus aanspraak maken op de afwijking uit artikel 87, lid 3, onder c).

In de mededeling van de Commissie betreffende de onderzoeksmethode van staatssteun die verband houdt met gestrande kosten ⁽⁶⁾ (hierna: „de methode”) wordt uiteengezet op welke wijze de Commissie voornemens is de afwijking uit artikel 87, lid 3, onder c), van het EG-Verdrag op dit soort steun toe te passen.

3.1.3. Toepassing van de methode op het onderdeel van de regeling dat de ontmanteling van de nucleaire-onderzoekslocaties betreft

Dit onderdeel van de regeling betreft de compensatie van de door Electrabel en SPE aangegane verbintenis om deel te nemen in de kosten voor de ontmanteling van de nucleaire sites van Mol-Dessel. Deze verbintenis werd aangegaan in de periode vóór de liberalisatie van de elektriciteitssector, toen het elektriciteitstarief werd vastgesteld onder toezicht van de staat en toen deze kosten dus konden worden verrekend in dit tarief.

Dit onderdeel van de regeling betreft dus de compensatie van de gestrande kosten in verband met een verbintenis die de onderneming heeft aangegaan en die door de liberalisatie moeilijk na te komen is.

Wat dit onderdeel van de regeling betreft, neemt de Commissie nota van de volgende elementen.

Ten eerste wordt de verbintenis die resulteerde in de gestrande kosten (hierna: „de verplichting”), gevormd door de „Overeenkomst betreffende de oprichting en het beheer van een fonds voor de sanering van nucleaire installaties in de zone-Mol-Dessel” van 19 december 1990, en dateert zij dus van vóór 19 februari 1997.

In de tweede plaats hoeft de reglementaire context waarin deze verplichting thuishoort, niet te worden onderzocht voorzover deze verplichting op zich de enige oorzaak is van de volledige, desbetreffende gestrande kosten uit het eerste onderdeel van de regeling.

Ten derde neemt de Commissie nota van de omvang van de bedragen die aan de verplichting verbonden zijn, en die aanleiding geven tot de gestrande kosten. De Commissie is van oordeel dat het niet-compenseren van deze bedragen het concurrentievermogen van de betrokken ondernemingen gevoelig zou verzwakken.

⁽⁵⁾ Voor een vergelijkbare gedachtegang, zie het besluit van de Commissie in zaak N 199/99 (Gemeentelijke vervoerbedrijven — Nederland), en met name deel 2.III. Schrijven SG(1999) D/9491 van 26.11.1999.

⁽⁶⁾ Goedgekeurd door de Commissie op 26 juli 2001. Beschikbaar op de website van het Directoraat-generaal Concurrentie van de Commissie, op volgend elektronisch adres: http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/legislation/stranded_costs/nl.pdf Meegedeeld aan de lidstaten bij schrijven SG(2001) D/290869 van 6.8.2001.

Ten vierde stelt de Commissie vast dat de „Overeenkomst betreffende de oprichting en het beheer van een fonds voor de sanering van nucleaire installaties in de zone-Mol-Dessel” geen clausule bevat waarmee de overeenkomst kan worden herroepen.

Ten vijfde betreft het een verbintenis van elk van de beide begunstigde ondernemingen ten opzichte van de staat — en niet ten opzichte van de ondernemingen die deel uitmaken van dezelfde groep.

Ten zesde komt het bedrag van de compensatie precies overeen met dat van de bedragen die voortvloeien uit deze verplichtingen, en zijn ze dus niet de uitkomst van forfaitaire schattingen.

Ten zevende zal de ontmanteling van de nucleaire-onderzoeklocaties geen enkele opbrengsten, winsten of meerwaarden opleveren.

Ten achtste betreffen de gestrande kosten uit dit onderdeel van de regeling geen activa die in handen zijn van de begunstigde ondernemingen.

Ten negende staan de gestrande kosten uit dit onderdeel van de regeling vast, en resulteren ze niet uit een daling van de marktprijzen voor elektriciteit of uit een te verwachten verlies aan marktaandelen van de begunstigde ondernemingen. Voor de berekening van het bedrag ervan kan dus geen rekening worden gehouden met de evolutie van dit soort parameters.

Ten tiende betreffen de gestrande kosten uit dit onderdeel van de regeling geen activa die op de balans van de begunstigde ondernemingen worden geboekt, noch kunnen zij worden afgeschreven.

Ten elfde bevat de „Overeenkomst betreffende de oprichting en het beheer van een fonds voor de sanering van nucleaire installaties in de zone-Mol-Dessel” geen clausule waarmee de waarde van de door de begunstigten verschuldigde bedragen kan worden verlaagd. Het bedrag van de compensatie van de gestrande kosten uit dit onderdeel van de regeling is dus beperkt tot het minimum dat noodzakelijk is om deze verplichting na te komen.

Ten twaalfde is de Commissie van oordeel dat de milieurisico's bijzonder zwaar zijn. De Commissie is dan ook van oordeel dat de verplichting nagekomen moet worden, wil men een belangrijk gevaar voor het milieu voorkomen, zodat, op grond van voetnoot vijf van de methode, de compensaties van deze verplichting ook na de uiterste termijn uit punt 3.12 van de methode mogen worden uitgekeerd.

De kosten die voortvloeien uit de verplichting, voldoen dus aan alle criteria als omschreven in de punten 3.1 tot 3.12 van de methode. Ze vormen dus in aanmerking komende gestrande kosten in de zin van genoemde methode.

De Commissie neemt, wat betreft de compensaties voorzien in dit onderdeel van de regeling voor de gestrande kosten die

voortvloeien uit de verplichting, nota van de volgende elementen.

De compensatie betreft duidelijk bepaalde gestrande kosten, die in de overeenkomst nauwkeurig zijn vastgelegd.

De gestrande kosten liggen vast, en zijn onafhankelijk van kwantificeerbare factoren zoals de marktprijs voor elektriciteit. Onder deze omstandigheden hoeft het bedrag van de compensatie, volgens de Commissie, niet aanpasbaar te zijn.

De Belgische autoriteiten hebben zich ertoe verbonden de Commissie een jaarlijks verslag te doen toekomen, waarin met name de evolutie van de concurrentiesituatie op de Belgische elektriciteitsmarkt zal worden belicht. Dit jaarlijkse verslag zal een gedetailleerde berekening bevatten van de gestrande kosten die voor het betrokken jaar in aanmerking genomen worden, en de uitgekeerde compensatiebedragen zullen er nauwkeurig in worden aangegeven.

Het maximumbedrag dat elk van de ondernemingen aan compensatie kan ontvangen, wordt vooraf vastgesteld. De Commissie neemt er nota van dat de verbintenis van de begunstigde ondernemingen is vastgelegd onder de vorm van een jaarlijks bedrag, en hun dus geen productiviteitswinsten kan opleveren.

De Belgische autoriteiten hebben zich ertoe verbonden geen reddings- en herstructureringssteun uit te keren aan de ondernemingen die steun ontvangen ten behoeve van de gestrande kosten.

De compensaties voldoen dus aan de criteria zoals beschreven in de punten 4.1 tot 4.3 van de methode.

Derhalve is de Commissie van oordeel dat, in het licht van de methode, deze compensaties, voorzover zij staatssteun vormen, verenigbaar zijn met het EG-Verdrag op grond van de afwijking uit artikel 87, lid 3, onder c), van het Verdrag, mits de financieringswijze die de Belgische autoriteiten voor dit onderdeel van de regeling kiezen, verenigbaar is met de bepalingen van het EG-Verdrag.

3.1.4. Toepassing van de methode op het onderdeel van de regeling dat de pensioenen van de werknemers uit de elektriciteitssector betreft

De ondernemingen uit de elektriciteitssector die vóór 1 januari 1993 werknemers hebben aangeworven, zijn door het paritair akkoord van 2 mei 1952 ertoe gehouden via een omslagstelsel een aanvullend pensioen te financieren voor deze werknemers, of hun rechthebbenden in geval van overlijden, te rekenen vanaf de datum waarop zij hun activiteiten hebben beëindigd (in overheidsdiensten, wordt het pensioen en de aanvullingen samengevoegd).

De overgangsregeling voor de elektriciteitsmarkt voorziet in de uitkering van een subsidie aan Electrabel en SPE voor een bedrag van in totaal zo'n 784 miljoen EUR, als compensatie van de kosten in verband met deze pensioenen.

Volgens de Belgische autoriteiten zouden de ondernemingen uit de elektriciteitssector immers — in tegenstelling tot de ondernemingen uit andere economische sectoren in België — niet in staat geweest zijn voldoende voorzieningen aan te leggen om de financiering van de pensioenen van hun werknemers veilig te stellen bij de overschakeling van een omslag- naar een kapitalisatiestelsel.

Deze onmogelijkheid om voldoende voorzieningen aan te leggen, zou te verklaren zijn doordat in de periode vóór de liberalisatie van de sector de prijzen voor elektriciteitsverbruik door de Belgische staat op een te laag niveau werden vastgelegd, hetgeen de ondernemingen uit deze sector dus belette om de voor dergelijke voorzieningen noodzakelijke heffingen erin te verrekenen.

De Commissie betwijfelt of de compensaties uit dit onderdeel van de regeling verenigbaar zijn met de bepalingen van de methode.

Voorlopig betwijfelt de Commissie de aard van de verplichting die aanleiding geeft tot gestrande kosten.

Volgens de Belgische autoriteiten zou de verplichting die aanleiding is tot de gestrande kosten de garantie zijn die de Belgische staat gaf dat de elektriciteitsprijzen, hoewel zij gedurende een bepaalde periode vastgesteld werden op een niveau dat te laag was om voldoende voorzieningen aan te leggen ter financiering van een overschakeling van het pensioenstelsel, in de toekomst op een hoger niveau zouden vastgesteld worden die het aanleggen van deze voorzieningen mogelijk zou maken.

De Commissie is van oordeel dat, opdat zo een garantie inzake werking in aanmerking zou kunnen komen om een gestrande kost te veroorzaken die in aanmerking komt volgens de methode, het op zijn minst noodzakelijk is expliciet het bestaan aan te tonen van de belofte van de staat om in de toekomst de prijzen op een niveau vast te stellen dat voldoende is om de voorzieningen aan te leggen nodig ter omschakeling van de financiering van de pensioenen. De Belgische autoriteiten hebben in dit stadium nog geen overtuigend bewijs van dit feit geleverd.

Een andere mogelijkheid is te overwegen dat de gestrande kosten veroorzaakt worden door het engagement van Electrabel en SPE om pensioenen toe te kennen aan hun werknemers op het moment dat zij hun activiteiten beëindigen.

De Commissie is van oordeel dat er eveneens twijfel bestaat over het feit dat dit engagement aanleiding zou kunnen geven tot het ontstaan van gestrande kosten in de zin van de methode. Inderdaad, het principe van de methode is om aan bedrijven die bestonden voor de vrijmaking van de elektriciteitssector, en die op dat moment niet economische verplichtingen op zich hebben genomen, die niet door nieuwkomers op een vrijgemaakte markt zouden genomen worden, zich onder bepaalde voorwaarden de kosten die veroorzaakt worden door deze engagementen gecompenseerd zien door de staat, teneinde een evenwicht te creëren tussen de werkingsvoorwaarden van de twee types van operatoren.

Dit principe lijkt in te houden dat de engagementen die in rekening kunnen worden gebracht voor gestrande kosten specifiek moeten zijn voor bedrijven die bestonden voor de vrijmaking, aangezien in het tegenovergestelde geval er geen evenwicht zou zijn ten voordele van nieuwkomers.

Het engagement van Electrabel en SPE om hun werknemers een pensioen uit te betalen op het moment van het beëindigen van hun activiteiten is evenwel opgelegd door de wet aan alle bedrijven die onder het paritair comité van de elektriciteits- en gassector vallen. De nieuwkomers op de markt nemen dus hetzelfde type van engagement op zich ten opzichte van hun eigen werknemers, en schijnen dus vanuit deze optiek over geen voordeel te opzichte van Electrabel en SPE te beschikken.

Gezien de hierboven gemaakte overwegingen, betwijfelt de Commissie dat het feit dat Electrabel en SPE pensioenen betalen aan hun werknemers beschouwd kan worden als een engagement of een garantie inzake werking, die in aanmerking komt om aanleiding te geven tot gestrande kosten die in de zin van de methode gecompenseerd kunnen worden door de staat.

Bovendien heeft de Commissie zelfs in het geval dat de betaling van deze pensioenen beschouwd zou kunnen worden als vallende onder zo een engagement of zo een garantie inzake werking, twijfel bij de kwantificering van deze gestrande kosten zoals zij door de Belgische autoriteiten in aanmerking worden genomen.

De Belgische autoriteiten waren immers van oordeel dat het bedrag van de gestrande kosten die verbonden waren aan dit onderdeel van de regeling, overeenkwam met het bedrag van de voorzieningen die de ondernemingen uit deze sector niet hadden aangelegd.

De Commissie is in deze fase van haar onderzoek evenwel van oordeel dat, wil dit bedrag daadwerkelijk in aanmerking komen in de zin van de methode, aangetoond moet worden dat de voorzieningen die de ondernemingen uit de sector in het verleden hebben aangelegd, daadwerkelijk de hoogst mogelijke voorzieningen waren, rekening houdend met het door de staat vastgestelde elektriciteitstarief. Was zulks niet het geval, dan kan niet worden uitgesloten dat het verschil tussen de omvang van de mogelijk en van de daadwerkelijk aangelegde voorzieningen minstens ten dele een opbrengst, winst of meerwaarde oplevert in verband met de verplichting of de garantie waaruit deze gestrande kost voortvloeit, overeenkomstig punt 3.7 van de methode. Dit saldo moet — ten dele of volledig — in mindering worden gebracht van het bedrag van de gestrande kosten zoals dat door Belgische autoriteiten aangemeld werd.

Een dergelijk onderzoek lijkt de Commissie des te noodzakelijker aangezien de tijd die verlopen is tussen de wet van 9 juli 1975 waarmee de overschakeling in de financieringsmethode van de pensioenregelingen werd ingesteld, en de liberalisatie van de elektriciteitssector bijzonder lang is (meer dan twintig jaar). Bovendien hebben de Belgische autoriteiten niet de kwantitatieve gegevens verstrekt aan de hand waarvan bepaald zou kunnen worden dat het tarief voor elektriciteitsverbruik in België gedurende deze periode bijzonder laag was (7).

(7) Bijzonder laag — bijvoorbeeld in vergelijking met de prijzen voor elektriciteitsverbruik in de overige lidstaten.

Ten slotte heeft de Commissie, onverminderd de twee bovenstaande opmerkingen, op de volgende punten twijfel bij de verenigbaarheid van dit onderdeel van de regeling met de methode:

- de aangemelde regeling lijkt niet te voorzien in een uiterste termijn voor de uitkering van deze compensaties. Volgens punt 3.12 van de methode moeten de voor compensatie in aanmerking komende gestrande kosten in de tijd beperkt blijven tot 18 februari 2006 en kan deze termijn tot 31 december 2010 verlengd worden voor de lidstaten die hun markt sneller openstellen dan Richtlijn 96/92/EG voorschrijft. Deze uiterste termijn kan enkel worden overschreden in het geval van verplichtingen of garanties die nog steeds dwingend moeten worden nagekomen omdat anders ernstige risico's voor de bescherming van het milieu, de veiligheid van personen, de sociale bescherming van werknemers of de veiligheid van het elektriciteitsnet zouden ontstaan, en voorzover dit naar behoren wordt gemotiveerd.

De Commissie betwijfelt dat voor de gestrande kosten uit dit onderdeel van de regeling bovenstaande uitzonderingen van toepassing zijn. Zij betwijfelt dus dat de compensaties uitgekeerd kunnen worden na de uiterste termijnen die supra vermeld werden;

- volgens punt 4.2 van de methode moet de uitkering van de compensaties het mogelijk maken de toekomstige ontwikkeling van de mededinging in aanmerking te nemen, met name aan de hand van kwantificeerbare factoren, zoals de marktprijzen voor elektriciteit. De Commissie merkt op dat deze factoren een belangrijke invloed hebben op het deel van de pensioenkosten die door de operator ten laste kan worden gelegd van zijn cliënten, en dus op het bedrag aan voorzieningen die nog moeten aangelegd worden om de overschakeling van financieringsmethode van de pensioenen te verzekeren. De aangemelde regeling lijkt evenwel geen regeling te omvatten om de compensaties die op basis van dergelijke paramaters uitgekeerd worden, aan te passen, hetgeen onverenigbaar lijkt met punt 4.2 van de methode;
- volgens punt 4.5 van de methode moet bij de vaststelling van het maximumbedrag van de compensaties die aan een onderneming kunnen worden uitgekeerd, de mogelijke productiviteitswinst van de onderneming in aanmerking genomen worden. De Commissie merkt op dat dergelijke productiviteitswinsten een belangrijke invloed hebben op het deel van de pensioenkosten die door de operator ten laste kan worden gelegd van zijn cliënten, en dus op het bedrag aan voorzieningen die nog moeten aangelegd worden om de overschakeling van financieringsmethode van de pensioenen te verzekeren. Bij de berekening van de compensatie die in het kader van dit onderdeel van de regeling uitgekeerd worden, lijken deze eventuele productiviteitswinsten niet in aanmerking te zijn genomen, hetgeen onverenigbaar lijkt met punt 4.5 van de methode.

Om al deze redenen heeft de Commissie twijfel bij de verenigbaarheid van dit onderdeel van de regeling met de methode — en dus met de afwijking uit artikel 87, lid 3, onder c), van het EG-Verdrag.

3.1.5. *Financieringsmethode van de compensaties*

De Commissie heeft zich bij haar onderzoek van de onderdelen van de regeling die verband houden met de ontmanteling van de nucleaire-onderzoekslocaties en met de pensioenen van de werknemers uit de elektriciteitssector, gebaseerd op het feit dat de Belgische autoriteiten hun aanmelding hebben ingetrokken betreffende de financieringsmethode van de op grond van dit onderdeel uit te keren compensaties. De Belgische autoriteiten hebben zich ertoe verbonden een financieringswijze uit te werken die in overeenstemming is met het EG-Verdrag, en de Commissie onverwijld in kennis te stellen van ieder initiatief in die zin.

3.2. **Het onderdeel van de regeling dat de bevordering van hernieuwbare energiebronnen en het rationeel energiegebruik betreft**

De Commissie merkt in de eerste plaats op dat de Belgische autoriteiten hun voornemen opgegeven hebben om Electrabel en SPE compensaties uit te keren in het kader van dit onderdeel van de regeling — zoals dat voorzien was bij de aanmelding van het dossier.

Onderstaande analyse betreft dus het stelsel ter bevordering van hernieuwbare energiebronnen en rationeel energiegebruik zoals dat uitgewerkt werd in het kader van het uitrustingsplan 1995-2005.

Dit stelsel ter bevordering van hernieuwbare energiebronnen omvat drie maatregelen die als gemeenschappelijk element hebben dat aan Electrabel en SPE op uniforme wijze de verplichting opgelegd wordt bepaalde activiteiten ter bevordering van hernieuwbare energiebronnen en rationeel energiegebruik te financieren — hetzij via een bovenop het elektriciteitsstarief gevraagde toeslag, die zij rechtstreeks innen en niet via een fonds of rekening beheerd of aangewezen door de staat, hetzij rechtstreeks via hun eigen middelen.

Om uit te maken of bij dit stelsel sprake is van staatssteun in de zin van artikel 87, lid 1, van het Verdrag, dient in het bijzonder nagegaan te worden of daarbij sprake is van de overdracht van staatsmiddelen (het gebruik van staatsmiddelen is immers een van de vier constituerende elementen om te spreken van staatssteun — naast het feit dat het om een specifieke maatregel gaat, dat een concurrentievoordeel toegekend wordt en dat het intracommunautaire handelsverkeer ongunstig beïnvloed wordt).

Ten eerste merkt de Commissie op dat de bedragen die Electrabel en SPE bij de eindgebruikers van elektriciteit int via de toeslag op het elektriciteitsstarief, niet via een door de staat beheerd of aangewezen fonds passeren. Dit mechanisme verplicht de eindgebruikers hun elektriciteit aan te kopen tegen een prijs die boven de marktprijs ligt, aangezien minstens een deel van deze prijs door de Staat wordt vastgesteld. Deze omstandigheid is vergelijkbaar met die welke het Hof van Justitie in zijn arrest-Preussen Elektra⁽⁸⁾ onderzocht heeft. Er is dus geen sprake van een overdracht van staatsmiddelen aan Electrabel en SPE — en dus ook niet van staatssteun aan deze beide ondernemingen.

⁽⁸⁾ Arrest van het Hof van 13 maart 2001 in zaak C-379/98.

Ten tweede dient de vraag gesteld te worden of de middelen die Electrabel en SPE in het kader van de acties ter bevordering van hernieuwbare energiebronnen en rationeel energiegebruik, staatsmiddelen vormen.

Deze middelen worden overgedragen op grond van een maatregel van de staat die onverschillig en zonder onderscheid van toepassing is op zowel Electrabel als SPE, waarvan de eerste (Electrabel) een particuliere onderneming is in de zin van de richtlijn van de Commissie betreffende de doorzichtigheid in de financiële betrekkingen tussen lidstaten en openbare bedrijven⁽⁹⁾, en de tweede (SPE) een openbaar bedrijf in de zin van diezelfde richtlijn.

In voormeld arrest-Preussen Elektra heeft het Hof, dat uitspraak deed in het kader een vraag om een prejudiciële beslissing in verband met een particuliere onderneming, aangegeven dat de middelen die in het kader van dit soort mechanisme overgedragen worden, geen staatsmiddelen vormen.

In onderhavig geval kan volgens de Commissie de conclusie van het Hof uitgebreid worden tot de middelen van alle ondernemingen waarop het mechanisme betrekking heeft, ongeacht de eigendomsstructuur, omdat dit mechanisme immers een algemene maatregel is die op identieke wijze van toepassing is op openbare en particuliere bedrijven, hetgeen erop wijst dat deze regeling niet ten doel heeft de middelen van een openbaar bedrijf te instrumentaliseren.

Deze benadering wordt in onderhavige zaak nog verder onderbouwd door het feit dat Electrabel in België de belangrijkste onderneming in deze sector is⁽¹⁰⁾.

Deze benadering strookt bovendien met die waarvoor advocaat-generaal Jacobs heeft gepleit in punt 175 van zijn conclusies in de zaak-Preussen Elektra⁽¹¹⁾.

Derhalve is de Commissie van oordeel dat dit onderdeel van de regeling geen enkele overdracht van staatsmiddelen in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag meebrengt. Aangezien de overdracht van staatsmiddelen één van de vier cumulatieve criteria is om te kunnen spreken van staatssteun in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag, is de Commissie van oordeel dat bij dit onderdeel van de regeling geen sprake is van staatssteun.

4. CONCLUSIE

De Commissie komt tot de conclusie dat zij niet in staat is uit te maken of het onderdeel van de overgangsregeling voor de

elektriciteitsmarkt dat verband houdt met de nucleaire-onderzoekslocaties, resulteert in de toekenning van staatssteun in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag aan de door deze regeling begunstigde ondernemingen. Zij doet evenwel opmerken dat, in de aanname dat er sprake zou zijn van staatssteun, deze verenigbaar zou zijn met het EG-Verdrag op grond van artikel 87, lid 3, onder c). Dit besluit laat de bepalingen van het Euratom-Verdrag onverlet.

De Commissie komt voorts tot de conclusie dat zij kan uitsluiten dat het onderdeel van de overgangsregeling voor de elektriciteitsmarkt dat verband houdt met de pensioenen van werknemers uit de elektriciteitssector resulteert in de toekenning van staatssteun in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag aan de door deze regeling begunstigde ondernemingen.

Bovendien is zij van oordeel dat zij in deze fase van haar onderzoek niet kan uitmaken of dit onderdeel van de regeling aanspraak kan maken op de afwijking uit artikel 87, lid 3, onder c), van het Verdrag — in de aanname dat met deze regeling daadwerkelijk staatssteun gemoeid zou zijn.

Gelet op de bovenstaande overwegingen verzoekt de Commissie België in het kader van de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag binnen één maand vanaf de datum van ontvangst van dit schrijven zijn opmerkingen te maken en alle dienstige inlichtingen te verstrekken voor de beoordeling van dit onderdeel van de regeling.

Deze informatie moet met name nadere gegevens bevatten over de financieringswijze van de regeling, de redenen waarom het onderdeel van de regeling dat de pensioenen van werknemers uit de elektriciteitssector betreft, een in aanmerking komende gestrande kost is in de zin van de methode, de rechtvaardiging van de berekeningswijze van de compensaties voor de gestrande kosten, de termijn gedurende welke deze compensaties uitgekeerd worden, hun aanpassing aan de reële situatie op de elektriciteitsmarkt, en de wijze waarop eventuele productiviteitswinsten van de begunstigde ondernemingen in aanmerking genomen worden. De Commissie verzoekt de Belgische autoriteiten onverwijld een afschrift van deze brief aan de potentiële begunstigten van de regeling te doen toekomen.

Dit besluit laat de bepalingen van het Euratom-Verdrag onverlet wat betreft het onderdeel van de regeling dat de ontmanteling van de nucleaire-onderzoekslocaties betreft.

Ten slotte concludeert de Commissie dat bij het onderdeel van de overgangsregeling voor de elektriciteitsmarkt dat verband houdt met de bevordering van hernieuwbare energiebronnen en rationeel energiegebruik, geen sprake is van staatssteun in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag.

De Commissie wijst België op de schorsende werking van artikel 88, lid 3, van het EG-Verdrag. Zij verwijst naar artikel 14 van Verordening (EG) nr. 659/1999 van de Raad, volgens hetwelk elke onrechtmatige steun van de begunstigde kan worden teruggevorderd.

⁽⁹⁾ Richtlijn 80/723/EEG van de Commissie van 25 juni 1980 betreffende de doorzichtigheid in de financiële betrekkingen tussen lidstaten en openbare bedrijven (PB L 195 van 29.7.1980, blz. 35), als gewijzigd bij Richtlijn 2000/52/EG van de Commissie van 26 juli 2000 (PB L 193 van 29.7.2000, blz. 75).

⁽¹⁰⁾ In 1999 zorgde Electrabel voor 92 % van de elektriciteitsproductie in België. Bron: Jaarverslag 2000 van de Commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas.

⁽¹¹⁾ Conclusie van advocaat-generaal Jacobs van 26 oktober 2000 in zaak C-379/98.

«Par la présente, la Commission a l'honneur d'informer la Belgique que, après avoir examiné les informations fournies par les autorités belges sur la mesure citée en objet (ci-après dénommée «la mesure»), elle a décidé:

- de ne pas soulever d'objections à l'égard du volet de la mesure concernant le démantèlement de sites nucléaires expérimentaux en raison du fait que dans l'hypothèse où ce volet de la mesure constituerait une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, il pourrait bénéficier de la dérogation de l'article 87, paragraphe 3, point c), dudit traité,
- d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE sur le volet de la mesure concernant les pensions des agents du secteur de l'électricité,
- de ne pas considérer comme une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE le volet de la mesure concernant la promotion de l'électricité générée à partir d'énergies renouvelables et de l'utilisation rationnelle de l'énergie.

1. PROCÉDURE

Le 19 décembre 1996 a été adoptée la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité⁽²⁾. Cette directive établit des règles communes concernant la production, le transport et la distribution d'électricité, et définit les modalités d'organisation et de fonctionnement du secteur de l'électricité, l'accès au marché, les critères et les procédures applicables en ce qui concerne les appels d'offres et l'octroi des autorisations ainsi que l'exploitation des réseaux.

Les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive au plus tard le 19 février 1999, et en informer immédiatement la Commission. La Belgique, la Grèce et l'Irlande pouvaient disposer d'un délai supplémentaire, respectivement d'un an, de deux ans et d'un an.

L'article 24 de la directive prévoit que les États membres où des engagements ou des garanties d'exploitation accordés avant l'entrée en vigueur de la directive risquent de ne pas pouvoir être honorés en raison des dispositions de la directive pourront demander à bénéficier d'un régime transitoire. Ce régime transitoire doit être limité dans le temps et peut comporter des dérogations aux chapitres IV, VI et VII de la directive. De même, les États membres qui, après l'entrée en vigueur de la directive, peuvent prouver que des problèmes importants se posent pour l'exploitation de leurs petits réseaux isolés peuvent demander à bénéficier de dérogations des dispositions pertinentes des chapitres IV, V, VI et VII de la directive. Les demandes de régimes transitoires ou de dérogations doivent être notifiées à la Commission qui décide ou non de les autoriser.

Les autorités belges ont notifié à la Commission les dispositifs institués par la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité sous l'appellation de «Régime transitoire du marché de l'électricité» par lettre du 18 octobre 1999 comme régime transitoire tel que visé à l'article 24 de la directive 96/92/CE précitée.

Par lettre du 21 décembre 1999, la Commission a indiqué aux autorités belges que les mesures transitoires prenant la forme d'aides d'État au sens de l'article 87 du traité CE ne dérogeaient pas aux chapitres IV, VI et VII de la directive 96/92/CE, et devaient par conséquent être notifiées conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité CE.

Les autorités belges ont notifié le «Régime transitoire du marché de l'électricité» à la Commission au sens de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE par lettre du 10 mars 2000, enregistrée par la Commission le 15 mars 2000.

Une correction de cette notification a été envoyée à la Commission par les autorités belges par courrier du 3 avril 2000, enregistré par la Commission le 7 avril 2000.

Un complément de notification a été envoyé à la Commission par les autorités belges par télécopie du 13 avril 2000 enregistrée par la Commission le 26 avril 2000.

Des renseignements complémentaires ont été demandés aux autorités belges par courrier (référence D/51786) du 2 mai 2000. Les autorités belges ont transmis ces renseignements par courrier daté du 26 mai 2000, enregistré par la Commission le 29 mai 2000.

Une nouvelle demande de renseignements complémentaires a été adressée aux autorités belges par courrier (référence D/53517) du 23 juin 2000. Les autorités belges ont transmis ces renseignements par courrier daté du 28 juillet 2000, et enregistré par la Commission le 2 août 2000.

Une nouvelle demande de renseignements complémentaires a été adressée aux autorités belges par courrier (référence D/54883) du 26 septembre 2000. Les autorités belges ont transmis ces renseignements par courrier daté du 16 octobre 2000, et enregistré par la Commission le 19 octobre 2000.

Une nouvelle demande de renseignements complémentaires a été adressée aux autorités belges par courrier (référence D/56214) du 18 décembre 2000. Les autorités belges ont transmis ces renseignements par courrier daté du 18 janvier 2001, et enregistré par la Commission le 19 janvier 2001.

Une nouvelle demande de renseignements complémentaires a été adressée aux autorités belges par courrier (référence D/55117) du 10 décembre 2001. Les autorités belges ont transmis ces renseignements par courrier daté du 14 janvier 2002, et enregistré par la Commission le 17 janvier 2002, ainsi que par courrier daté du 25 janvier 2002, et enregistré par la Commission le 29 janvier 2002.

Les autorités belges ont transmis des renseignements complémentaires sur la mesure par courrier daté du 26 février 2002, et enregistré par la Commission le 28 février 2002.

2. DESCRIPTION DU DISPOSITIF

Il s'agit d'un dispositif destiné selon les autorités belges à compenser l'impact financier d'engagements que les producteurs et les distributeurs d'électricité belges auraient pris ou se seraient vu imposer à l'époque du marché de l'électricité réglementé et que la libéralisation de ce marché induite par l'entrée en vigueur de la directive 96/92/CE précitée risquerait de rendre impossible à assumer.

(2) JO L 27 du 30.1.1997, p. 20.

Le dispositif comprend trois volets, concernant respectivement le démantèlement de sites nucléaires expérimentaux, les pensions des agents du secteur de l'électricité et la promotion des énergies renouvelables et de l'utilisation rationnelle de l'énergie.

2.1. Volet concernant le démantèlement de sites nucléaires expérimentaux

Le site de recherche de Mol-Dessel (également connu sous le nom de CEN-SCK) a été utilisé pour la mise au point de la filière de production d'électricité d'origine nucléaire belge. Ce site est généralement subdivisé en trois parties: le site BP1, le site BP2, et le reste du site Mol-Dessel, constitué essentiellement du réacteur BR3.

Le démantèlement de ces trois ensembles a commencé en 1989, et doit se poursuivre jusqu'à l'horizon 2030 pour certains d'entre eux.

Les parts respectives de l'État belge et des producteurs d'électricité dans ce démantèlement sont fixées par la «convention relative à la création et à la gestion d'un fonds d'assainissement d'installations nucléaires du site de Mol-Dessel» du 19 décembre 1990 et ses avenants, dont l'État belge et les producteurs d'électricité Electrabel et SPE sont signataires.

Cette convention prévoit que:

- l'assainissement du site BP1 est totalement à la charge de l'État belge,
- l'assainissement du site BP2 est totalement à la charge des producteurs ⁽³⁾,
- l'assainissement du reste du site Mol-Dessel est pour 25 % à la charge des producteurs et pour 75 % à la charge de l'État belge.

Les autorités belges considèrent que ces engagements, pris par les producteurs dans le cadre d'un marché réglementé, affectent leur compétitivité dans la perspective d'un marché libéralisé. Le régime transitoire du marché de l'électricité prévoit des compensations à ces engagements.

Le montant de ces compensations correspond aux sommes à verser par les producteurs pour le démantèlement du site BP2 et de la partie du site Mol-Dessel hors BP1 et BP2. Il est au maximum de 377,033 millions d'euros, dont 335,276 millions d'euros correspondent aux travaux sur le site BP2 et 41,757 millions d'euros correspondent aux travaux sur le reste du site Mol-Dessel.

Ces compensations seront versées pour 91,5 % à la société Electrabel et pour 8,5 % à la société SPE.

2.2. Volet concernant les pensions des agents du secteur de l'électricité

À leur cessation d'activité, les agents du secteur de l'électricité belge, ou leurs ayant droit en cas de décès, bénéficient d'un complément de ressources qui s'ajoute à leur pension légale (dans le cas du secteur public, la pension légale et le complément sont confondus).

Le mode de financement de ce complément de ressources dépend de la date de recrutement des agents et de leur date de cessation d'activité.

Pour les agents engagés avant le 1^{er} janvier 1993 et ayant cessé leur activité avant le 1^{er} janvier 1993, le mode de financement du complément de ressource est fixé par l'accord paritaire du 2 mai 1952. Il s'agit d'un financement par répartition, à la charge de l'ancien employeur.

Pour les agents engagés avant le 1^{er} janvier 1993 et encore en activité le 1^{er} janvier 1993, l'accord paritaire du 2 mai 1952 s'applique également. Le mode de financement du complément de ressources par défaut est donc la répartition, à la charge de l'employeur. Cependant, ces agents ont eu depuis 1993 la possibilité d'opter volontairement pour un financement par capitalisation, en application de la loi du 9 juillet 1975 ⁽⁴⁾. Pour les agents ayant choisi le financement par capitalisation, l'employeur doit assurer le paiement de la partie des droits acquis au moment du changement de système.

Pour les agents engagés après le 1^{er} janvier 1993, la loi du 9 juillet 1975 s'applique et le seul mode de financement du complément de ressource possible est la capitalisation.

Le régime transitoire du marché de l'électricité prévoit des compensations pour les producteurs ayant à payer des pensions par répartition.

La valeur des compensations est calculée en estimant sur la base d'hypothèses démographiques le montant des pensions restant à verser par répartition à compter de la libéralisation du marché électrique, et en retranchant de ce montant la valeur (actualisée) des provisions effectuées à la date de la libéralisation du marché en vue du paiement des pensions.

Le montant total de ces compensations est d'environ 784 millions d'euros. Elles seront versées pour environ 752 millions d'euros à Electrabel et pour environ 32 millions d'euros à SPE.

2.3. Volet concernant la promotion des énergies renouvelables et de l'utilisation rationnelle de l'énergie

Dans le cadre du plan d'équipement 1995-2005 et sur recommandation du comité de contrôle de l'électricité et du gaz, le secteur de l'électricité belge a pris trois engagements:

- l'activité de distribution de l'électricité prélèverait 1 centime de francs belges (BEF) par kWh fourni à sa clientèle et l'investirait dans des actions de promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie inscrites dans un plan élaboré en collaboration avec les régions,
- l'activité de production de l'électricité investirait sur ses fonds propres une somme annuelle croissante [allant de 380 000 000 de BEF (environ 9,4 millions d'euros) en 1995 à 450 000 000 de BEF (environ 11,2 millions d'euros) en 2005] dans un plan de promotion de l'électricité verte accepté par le comité de contrôle de l'électricité et du gaz,

⁽³⁾ Dans les limites cependant du plafond prévu du coûts des travaux.

⁽⁴⁾ Loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, *Moniteur belge* du 29 juillet 1975, p. 9267.

— le secteur de l'électricité fournirait une prime extratarifaire de 1 à 2 BEF par kWh (environ 2,5 à 5 centimes d'euros) pendant dix ans aux installations produisant de l'électricité à partir d'énergie renouvelable.

Le régime transitoire du marché de l'électricité prévoyait initialement des compensations d'un montant total d'environ 134 millions d'euros pour les entreprises Electrabel et SPE, soumises aux trois mesures énoncées ci-dessus.

Ce projet de versement de compensations a été en fin de compte abandonné par les autorités belges, qui en ont informé la Commission par courrier du 26 février 2002, enregistré par la Commission le 28 février 2002.

3. APPRÉCIATION DU DISPOSITIF

En notifiant le régime transitoire du marché de l'électricité, les autorités belges ont respecté les obligations qui résultent de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE et de l'article 62, paragraphe 3, de l'accord EEE.

3.1. Concernant les volets de la mesure relatifs au démantèlement de sites nucléaires expérimentaux et aux pensions des agents du secteur de l'électricité

3.1.1. Sur l'existence d'une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE

La mesure notifiée prévoit au titre de ces deux volets l'attribution par l'État aux sociétés Electrabel et SPE de subsides qui semblent en première analyse constituer un avantage pour ces entreprises, de nature à permettre à ces entreprises de renforcer leur position par rapport à d'autres entreprises également présentes sur le marché et ne recevant pas de tels subsides.

De plus, la Commission considère à ce stade de son analyse que le régime transitoire du marché de l'électricité est susceptible d'affecter le commerce entre les États membres, compte tenu du fait que le marché électrique peut faire l'objet d'échanges entre des entreprises de différents États membres en particulier suite à l'entrée en vigueur de la directive 96/92/CE précitée. Le fait de favoriser certaines de ces entreprises semble donc pouvoir avoir un effet sur le commerce intracommunautaire et engendrer des distorsions de concurrence.

Les autorités belges ont souhaité retirer de la notification du dossier leur projet initial de mode de financement de la mesure. Dans l'état actuel des informations à sa disposition, la Commission ne peut donc déterminer si les subsides attribués aux sociétés Electrabel et SPE constituent des ressources d'État.

La mobilisation d'une ressource d'État est une condition nécessaire à la qualification d'une mesure comme aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.

La Commission estime donc que, à ce stade de son analyse, et compte tenu de ce que le régime transitoire du marché de l'électricité semble affecter les échanges entre États membres et fausser ou menacer de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises, elle ne peut exclure que ce régime constitue une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.

3.1.2. Application des articles 87, paragraphe 2, et 87, paragraphe 3, du traité CE

Le principe général énoncé à l'article 87, paragraphe 1, du traité CE est celui de l'incompatibilité des aides d'État avec le

marché commun. Cependant, les paragraphes 2 et 3 de l'article 87 prévoient certaines possibilités de dérogation à cette règle générale.

La Commission estime tout d'abord à ce stade de son analyse que le régime transitoire du marché de l'électricité ne constitue pas une aide à caractère social octroyée aux consommateurs individuels, qu'il n'est pas destiné à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires et qu'il ne concerne pas l'économie de certaines régions de la république fédérale d'Allemagne affectées par la division de l'Allemagne. Les aides d'État potentielles instituées par le régime transitoire du marché de l'électricité ne semblent donc pas pouvoir bénéficier des dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 2, du traité CE.

La Commission estime également à ce stade de son analyse que le régime transitoire du marché de l'électricité n'est destiné ni à favoriser le développement économique de régions en retard de développement, ni à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun, ni à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine. Les aides d'État potentielles instituées par le régime ne semblent donc pas non plus pouvoir bénéficier des dérogations prévues par l'article 87, paragraphe 3, point a), l'article 87, paragraphe 3, point b), et l'article 87, paragraphe 3, point d), du traité CE.

La seule dérogation susceptible de s'appliquer éventuellement dans le cas d'espèce semble donc être celle prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c).

La Commission considère que la dérogation de l'article 87, paragraphe 3, point c), est susceptible, sous certaines conditions, de s'appliquer pour les aides destinées à couvrir des coûts échoués, c'est-à-dire les coûts d'engagements ou de garanties de fonctionnement qui risqueraient d'être remis en cause du fait du processus de libéralisation du secteur électrique.

En effet, de telles aides contribuent au développement du secteur de l'électricité en favorisant la transition d'un marché largement clos à un marché partiellement libéralisé⁽⁵⁾. Lorsque les distorsions de concurrence qu'elles induisent sont limitées dans le temps et leurs effets, la Commission peut juger qu'elles n'affectent pas les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun, et qu'elles peuvent donc bénéficier de la dérogation de l'article 87, paragraphe 3, point c).

La communication de la Commission sur la méthodologie d'analyse des aides d'État liées à des coûts échoués⁽⁶⁾ (ci-après dénommée «la méthodologie») détaille les critères que la Commission entend appliquer pour déterminer dans quelles conditions la dérogation de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité peut s'appliquer à ces aides.

⁽⁵⁾ Pour un raisonnement similaire, voir la décision de la Commission dans l'affaire N 199/99 (services locaux de transport public aux Pays-Bas), et tout particulièrement sa section 2.III. Lettre SG(99) D/9491 du 26 novembre 1999.

⁽⁶⁾ Adoptée par la Commission le 26 juillet 2001. Disponible sur le site Internet de la direction générale de la concurrence de la Commission à l'adresse électronique suivante: http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/legislation/aid3.html#electricity. Communiquée aux États membres par lettre [référence SG(2001) D/290869] du 6 août 2001.

3.1.3. Application de la méthodologie au volet de la mesure concernant le démantèlement de sites nucléaires expérimentaux

Ce volet de la mesure vise la compensation de l'engagement pris par les sociétés Electrabel et SPE de participer aux coûts de démantèlement du site nucléaire de Mol-Dessel. Cet engagement a été pris durant la période précédant la libéralisation du secteur électrique, pendant laquelle le tarif de l'électricité était fixé sous le contrôle de l'État, et pendant laquelle ces coûts pouvaient donc être répercutés sur ledit tarif.

Ce volet de la mesure vise donc la compensation de coûts échoués liés à un engagement pris par les entreprises et que la libéralisation rend difficile à honorer.

La Commission prend note des éléments suivants concernant ce volet de la mesure.

En premier lieu, l'engagement donnant lieu aux coûts échoués (ci-après dénommé «l'engagement») est constitué par la «convention relative à la création et à la gestion d'un fond d'assainissement d'installations nucléaires du site de Mol-Dessel», du 19 décembre 1990, et est donc antérieur au 19 février 1997.

En deuxième lieu, il n'y a pas lieu d'examiner le contexte réglementaire dans lequel s'inscrit l'engagement, dans la mesure où cet engagement constitue à lui seul la source de l'ensemble des coûts échoués en cause dans le premier volet de la mesure.

En troisième lieu, la Commission note l'importance des sommes concernées par l'engagement et donnant lieu aux coûts échoués. La Commission estime que la non-compensation de ces sommes affecterait sensiblement la compétitivité des entreprises concernées.

En quatrième lieu, la Commission note que la «convention relative à la création et à la gestion d'un fond d'assainissement d'installations nucléaires du site de Mol-Dessel» ne contient pas de clause permettant de la révoquer.

En cinquième lieu, l'engagement lie chacune des deux entreprises bénéficiaires à l'État, et non à des entreprises appartenant au même groupe qu'elles.

En sixième lieu, les compensations sont exactement égales aux montants résultant des engagements, et ne sont donc pas le résultat d'évaluations forfaitaires.

En septième lieu, les activités de démantèlement des sites nucléaires expérimentaux ne donneront lieu à aucun revenu, bénéfice ou plus-value.

En huitième lieu, les coûts échoués liés à ce volet de la mesure ne concernent pas des actifs possédés par les entreprises bénéficiaires.

En neuvième lieu, les coûts échoués liés à ce volet de la mesure sont fixes et ne résultent pas d'une baisse des prix de marché de l'électricité ou de la perte prévisible de parts de marché pour les entreprises bénéficiaires. Le calcul de leur valeur ne peut donc tenir compte de l'évolution de ce type de paramètres.

En dixième lieu, les coûts échoués liés à ce volet de la mesure ne concernent pas des actifs possédés par les entreprises bénéficiaires, et ne peuvent donc être l'objet d'un amortissement.

En onzième lieu, la «convention relative à la création et à la gestion d'un fond d'assainissement d'installations nucléaires du site de Mol-Dessel» ne comprend pas de clause permettant de diminuer la valeur des sommes dues par les bénéficiaires. Le montant des compensations pour les coûts échoués liés à ce volet de la mesure est donc réduit au minimum nécessaire pour honorer l'engagement.

En douzième lieu, la Commission estime que les risques courus en matière de protection de l'environnement sont d'une gravité particulière. La Commission estime donc que l'engagement doit être honoré sous peine de risque majeur en ce qui concerne la protection de l'environnement, et que, en conséquence, en application de la note 5 de bas de page de la méthodologie, les compensations liées à cet engagement peuvent être versées au delà des dates limites prévues à son point 3.12.

Les coûts résultant de l'engagement satisfont donc l'ensemble des critères définis aux points 3.1 à 3.12 de la méthodologie. Ils constituent donc des coûts échoués éligibles au sens de ladite méthodologie.

La Commission prend note des éléments suivants concernant les compensations prévues par ce volet de la mesure pour les coûts échoués résultant de l'engagement.

Les compensations visent des coûts échoués clairement déterminés, faisant l'objet d'une détermination précise dans la convention.

Les coûts échoués sont fixes et indépendants de l'évolution de facteurs quantifiables tels que le prix de marché de l'électricité. La Commission considère que dans ces conditions, il n'a pas lieu que le montant des compensations soit modulable.

Les autorités belges se sont engagées à transmettre à la Commission un rapport annuel qui vise en particulier à préciser l'évolution de la situation concurrentielle de son marché électrique. Ce rapport annuel détaillera le calcul des coûts échoués pris en compte au titre de l'année correspondante et précisera les montants des compensations versées.

Le montant maximal des compensations susceptibles d'être versées à chaque entreprise est fixé *ex ante*. La Commission note que l'engagement des entreprises bénéficiaires est fixé en montant annuel, et ne peut donc pas faire l'objet de gains de productivité de leur part.

Les autorités belges se sont engagées à ne verser aucune aide au sauvetage et à la restructuration aux entreprises qui bénéficient d'aides pour les coûts échoués.

Les compensations satisfont donc les critères définis aux points 4.1 à 4.3 de la méthodologie.

La Commission considère donc à la lumière de la méthodologie que ces compensations, dans la mesure où elles constituent des aides d'État, sont compatibles avec le traité CE en application de la dérogation de son article 87, paragraphe 3, point c), sous la condition que le mode de financement de ce volet que choisiront les autorités belges soit compatible avec les dispositions du traité CE.

3.1.4. Application de la méthodologie au volet de la mesure concernant les pensions des agents du secteur de l'électricité

Les entreprises du secteur de l'électricité ayant engagé des agents avant le 1^{er} janvier 1993 sont tenues selon l'accord paritaire du 2 mai 1952 de verser par répartition un complément de pension à ces agents, ou à leurs ayants droit en cas de décès, à compter de leur cessation d'activité (dans le cas du secteur public, pension et complément sont confondus).

Le régime transitoire du marché de l'électricité prévoit le versement d'un subside aux entreprises Electrabel et SPE d'un montant total d'environ 784 millions d'euros à titre de compensation des coûts liés à ces pensions.

En effet, selon les autorités belges, contrairement aux entreprises des autres secteurs de l'économie belge, les entreprises du secteur de l'électricité n'auraient pas été en mesure d'effectuer des provisions suffisantes pour assurer le basculement du mode de financement des pensions de leurs agents de la répartition à la capitalisation.

Cette impossibilité de provisionner des montants suffisants serait due au fait que, durant la période précédant la libéralisation du secteur, les prix de l'électricité à la consommation auraient été fixés par l'État belge à un niveau trop bas, empêchant ainsi les entreprises du secteur d'y inclure les charges nécessaires à de telles provisions.

La Commission émet des doutes sur la compatibilité des compensations prévues par ce volet de la mesure avec les dispositions de la méthodologie.

De manière préliminaire, la Commission émet des doutes sur la nature de l'engagement donnant lieu aux coûts échoués.

Selon les autorités belges, l'engagement générant les coûts échoués serait la garantie donnée par l'État belge que les tarifs de l'électricité, bien que fixés pendant une certaine période à une valeur trop basse pour permettre la constitution de provisions pour financement du basculement du régime de pension, seraient dans le futur fixés à une valeur plus haute permettant la constitution de ces provisions.

La Commission estime que, pour qu'une telle garantie d'exploitation soit susceptible de générer un coût échoué admissible au sens de la méthodologie, il faudrait à tout le moins démontrer de manière explicite l'existence de la promesse de l'État de fixer dans le futur les prix à un niveau suffisant pour permettre la constitution des provisions nécessaires au basculement du mode de financement des pensions. Or les autorités belges n'ont pas à ce stade apporté de démonstration convaincante de ce fait.

Une autre possibilité est de considérer que les coûts échoués sont générés par l'engagement pris par les sociétés Electrabel et SPE de verser une pension à leurs employés lors de leur cessation d'activité.

La Commission estime qu'il existe également des doutes quant au fait que cet engagement puisse donner lieu à des coûts échoués au sens de la méthodologie. En effet, le principe de la méthodologie est de permettre aux entreprises établies avant la libéralisation du secteur de l'électricité, et qui auraient pris à cette époque des engagements non économiques qui ne

seraient pas pris par de nouveaux entrants sur un marché libéralisé, de voir dans certaines conditions les coûts générés par ces engagements compensés par l'État, afin d'établir un équilibre entre les conditions d'opération des deux types d'opérateurs.

Ce principe semble impliquer que les engagements pris en compte dans les coûts échoués doivent être spécifiques aux entreprises existant avant la libéralisation, car dans le cas contraire il n'existe pas de déséquilibre en faveur des nouveaux entrants.

Or l'engagement pris par Electrabel et SPE vis-à-vis de leurs employés de leur payer une pension à leur cessation d'activité est imposé par la loi à l'ensemble des entreprises relevant de la convention collective des secteurs de l'électricité et du gaz. Les nouveaux entrants sur le marché prennent donc le même type d'engagement vis-à-vis de leurs propres employés, et ne semblent donc pas bénéficier de ce point de vue d'un avantage vis à vis d'Electrabel et de SPE.

Au vu des considérations exprimées ci-dessus, la Commission émet des doutes sur le fait que le paiement de pensions à leurs agents par les sociétés Electrabel et SPE puisse être considéré comme relevant d'un engagement ou d'une garantie d'opération susceptible de donner lieu à des coûts échoués compensables par des aides d'État au sens de la méthodologie.

De plus, dans l'hypothèse même où le paiement de ces pensions pourrait être considéré comme relevant d'un tel engagement ou d'une telle garantie d'opération, la Commission émet des doutes sur la quantification des coûts échoués telle que retenue par les autorités belges.

En effet, les autorités belges ont considéré que le montant des coûts échoués associés à ce volet de la mesure était égal au montant des provisions non effectuées par les entreprises du secteur.

Or la Commission estime à ce stade de son analyse que, pour que cette somme soit effectivement entièrement éligible au sens de la méthodologie, il serait nécessaire de démontrer que les provisions constituées par les entreprises du secteur dans le passé étaient effectivement les plus hautes provisions possibles compte tenu du tarif de l'électricité fixé par l'État. Si tel n'était pas le cas, il ne pourrait être exclu que la différence entre le niveau des provisions possibles et le niveau des provisions effectivement réalisées constitue tout au moins en partie un revenu, un bénéfice ou une plus-value lié à l'engagement ou à la garantie génératrice du coût échoué, au sens du point 3.7 de la méthodologie. Tout ou partie de cette différence devrait alors être soustrait du montant des coûts échoués éligibles tels que notifiés par les autorités belges.

Cette vérification apparaît d'autant plus nécessaire à la Commission que le temps écoulé entre la loi du 9 juillet 1975 instaurant le basculement du mode de financement des régimes de pensions et la libéralisation du secteur de l'électricité est particulièrement important (plus de vingt ans). De plus, les autorités belges n'ont pas fourni de données quantitatives permettant de conclure que le tarif de l'électricité à la consommation en Belgique a été particulièrement faible (7) durant cette période.

(7) Par exemple, en comparaison avec les prix de l'électricité à la consommation dans les autres États membres.

Enfin, et sans préjudice des deux observations mentionnées ci-dessus, la Commission émet les doutes suivants sur la compatibilité de ce volet de la mesure avec la méthodologie.

- La mesure notifiée ne semble pas prévoir de date limite claire au versement des compensations. Or le point 3.12 de la méthodologie indique que les coûts échoués éligibles pour compensation doivent être limités dans le temps au 18 février 2006, cette date pouvant être portée au 31 décembre 2010 pour les États membres qui ouvrent leur marché plus vite que ne l'impose la directive 96/92/CE suscitée. Cette dernière date limite ne peut être dépassée que dans le cas d'engagements ou de garanties qui doivent impérativement continuer d'être honorés sous peine de risques majeurs en ce qui concerne la protection de l'environnement, la sécurité des personnes, la protection sociale des travailleurs et la sécurité du réseau électrique, et pour autant que cela soit dûment justifié.

La Commission émet des doutes sur le fait que les coûts échoués visés par ce volet de la mesure relèvent des exceptions mentionnées ci-dessus. Elle émet donc des doutes sur le fait que les compensations puissent être versées au delà des dates limites mentionnées ci-dessus.

- Le point 4.2 de la méthodologie indique que le versement des compensations doit permettre de tenir compte de l'évolution future de la concurrence, notamment à travers des facteurs quantifiables, tels que les prix de marché de l'électricité. La Commission note que de tels facteurs influent de manière sensible sur la part du coût des pensions pouvant être passée par l'opérateur à la charge de ses clients, et donc sur le montant des provisions restant à effectuer pour garantir le basculement du mode de paiement des pensions. Or la mesure notifiée ne semble pas prévoir de dispositif de modulation des compensations versées tenant compte de tels paramètres, ce qui semble incompatible avec le point 4.2 de la méthodologie.
- Le point 4.5 de la méthodologie indique que le montant maximal des compensations à verser à une entreprise doit être calculé en tenant compte des gains de productivité possibles pour l'entreprise. La Commission note que de tels gains de productivité influent de manière sensible sur la part du coût des pensions pouvant être passée par l'opérateur à la charge de ses clients, et donc sur le montant des provisions restant à effectuer pour garantir le basculement du mode de paiement des pensions. Or le calcul des compensations à verser au titre de ce volet de la mesure ne semble pas prendre en compte ces éventuels gains de productivité, ce qui semble incompatible avec le point 4.5 de la méthodologie.

Pour l'ensemble des raisons évoquées ci-dessus, la Commission émet des doutes sur la compatibilité de ce volet de la mesure avec la méthodologie et, partant, avec la dérogation de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE.

3.1.5. *Mode de financement des compensations*

La Commission a fondé son analyse des volets de la mesure relatifs au démantèlement de sites nucléaires expérimentaux et aux pensions des agents du secteur de l'électricité sur le fait que les autorités belges ont retiré de leur notification la section concernant le mode de financement des compensations à verser au titre de ces volets. Les autorités belges se sont engagées à établir un mode de financement conforme aux dispositions du traité CE et à informer sans délai la Commission de toute initiative en ce sens.

3.2. **Concernant le volet de la mesure relatif à la promotion des énergies renouvelables et de l'utilisation rationnelle de l'énergie**

La Commission note en premier lieu que les autorités belges ont abandonné leur projet de versement de compensations aux entreprises Electrabel et SPE au titre de ce volet de la mesure, tel qu'il était prévu dans la notification du dossier.

L'analyse qui suit vise donc le système de promotion des énergies renouvelables et de l'utilisation rationnelle de l'énergie, tel que mis en place dans le cadre du plan d'équipement 1995-2005.

Ce système de promotion des énergies renouvelables consiste en trois mesures dont le point commun est qu'elles imposent de manière uniforme aux deux sociétés Electrabel et SPE l'obligation de financer certaines activités de promotion des énergies renouvelables et de l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit par le biais d'une surcharge sur le tarif de l'électricité collectée directement par elles et ne transitant par aucun fonds ou aucun compte géré ou désigné par l'État, soit directement via leurs fonds propres.

Afin de déterminer si ce système contient un élément d'aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, il convient de déterminer en particulier s'il implique le transfert de ressources d'État (l'implication de ressources d'État étant l'un des quatre éléments constitutifs de la notion d'aide d'État, avec la spécificité, l'attribution d'un avantage concurrentiel et l'affectation des échanges intracommunautaires).

En premier lieu, la Commission note que les sommes prélevées par Electrabel et SPE auprès des consommateurs finals d'électricité par le biais de la surcharge sur le tarif ne transitent par aucun fonds géré ou désigné par l'État. Ce mécanisme impose aux consommateurs finals d'acheter leur électricité à un prix supérieur au prix du marché, en raison du fait qu'une partie au moins de ce prix est fixée par l'État. Cette situation est similaire à celle examinée par la Cour dans l'arrêt *PreussenElektra* ⁽⁸⁾. Elle n'implique donc aucun transfert de ressources d'État aux sociétés Electrabel et SPE, et donc aucune aide d'État à ces deux sociétés.

En second lieu, il convient de s'interroger sur la nature de ressources d'État des fonds versés par les sociétés Electrabel et SPE dans le cadre des actions de promotion des énergies renouvelables et de l'utilisation rationnelle de l'énergie.

⁽⁸⁾ Arrêt de la Cour du 13 mars 2001 dans l'affaire C-379/98.

Ces fonds sont transférés en application d'une mesure étatique s'appliquant indifféremment et indistinctement aux deux sociétés Electrabel et SPE, dont l'une, Electrabel est privée au sens de la directive de la Commission relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques⁽⁹⁾, et l'autre, SPE, est publique au sens de ladite directive.

Dans l'arrêt *PreussenElektra* suscité, la Cour, qui se prononçait dans le cadre d'une question préjudicielle sur le cas d'une entreprise privée, a indiqué que les ressources transférées dans le cadre de ce type de mécanisme ne constituaient pas des ressources d'État.

La Commission estime que, dans le cas d'espèce, la conclusion de la Cour peut s'étendre aux ressources de l'ensemble des entreprises concernées par le mécanisme, quel que soit leur régime de propriété, puisque ce mécanisme est une mesure globale s'appliquant de manière identique aux acteurs publics et privés, ce qui indique que l'objectif du mécanisme n'est pas d'instrumentaliser les ressources d'une entreprise publique.

Cette approche est confortée dans le présent cas par le fait qu'Electrabel est l'opérateur largement majoritaire en Belgique⁽¹⁰⁾.

Elle est de plus conforme à l'approche préconisée par l'avocat général Jacobs au paragraphe 175 de ses conclusions dans l'affaire *PreussenElektra*⁽¹¹⁾.

La Commission considère donc que ce volet de la mesure ne met en jeu aucun transfert de ressources d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. Le transfert de ressources d'État étant l'un des quatre critères cumulatifs constitutifs de la notion d'aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, la Commission considère que ce volet de la mesure ne contient pas d'élément d'aide d'État.

4. CONCLUSION

La Commission conclut qu'elle n'est pas en mesure de déterminer si le volet du régime transitoire du marché de l'électricité concernant le démantèlement de sites nucléaires expérimentaux donne lieu à l'attribution d'aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE aux compagnies bénéficiaires du régime. Cependant, elle note que dans l'hypothèse où de telles aides seraient constituées, elles seraient compatibles avec le traité CE en application de son article 87, paragraphe 3, point c). Cette décision est sans préjudice des dispositions du traité Euratom.

La Commission conclut également qu'elle ne peut exclure que le volet du régime transitoire du marché de l'électricité concernant les pensions des agents du secteur de l'électricité donne lieu à l'attribution d'aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE aux compagnies bénéficiaires du régime.

Elle considère de plus qu'elle n'est pas en mesure de conclure à ce stade de son analyse que ce volet de la mesure pourrait bénéficier de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c) du traité CE dans l'hypothèse où il contiendrait effectivement un élément d'aide d'État.

Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission invite la Belgique, dans le cadre de la procédure de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, à présenter ses observations et à fournir toute information utile pour l'évaluation de ce volet du régime, dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la présente.

Ces informations devront en particulier détailler le mode de financement de la mesure, les raisons pour lesquelles le volet de la mesure concernant les pensions des agents du secteur de l'électricité vise un coût échoué éligible au sens de la méthodologie, la justification du mode de calcul des compensations des coûts échoués, la durée de versement de ces compensations, leur ajustement aux conditions réelles du marché de l'électricité et le mode de prise en compte des gains de productivité éventuels des entreprises bénéficiaires. Elle invite les autorités belge à transmettre immédiatement une copie de cette lettre au bénéficiaire potentiel du dispositif.

Cette décision est sans préjudice des dispositions du traité Euratom en ce qui concerne le volet de la mesure concernant le démantèlement de sites nucléaires expérimentaux.

La Commission conclut enfin que le volet du régime transitoire du marché de l'électricité concernant la promotion des énergies renouvelables et de l'utilisation rationnelle de l'énergie ne contient pas d'élément d'aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.

La Commission rappelle à la Belgique l'effet suspensif de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE et se réfère à l'article 14 du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil qui prévoit que toute aide illégale pourra faire l'objet d'une récupération auprès de son bénéficiaire.».

⁽⁹⁾ Directive 80/723/CEE de la Commission du 25 juin 1980 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques (JO L 195 du 29.7.1980, p. 35), telle que modifiée par la directive 2000/52/CE de la Commission (JO L 193 du 29.7.2000, p. 75).

⁽¹⁰⁾ En 1999, environ 92 % de la production d'électricité en Belgique était assurée par Electrabel. Source: Rapport annuel 2000 de la commission de régulation de l'électricité et du gaz.

⁽¹¹⁾ Conclusions de l'avocat général Jacobs rendues le 26 octobre 2000 dans l'affaire C-379/98.

AYUDAS ESTATALES — ESPAÑA**Ayuda C 50/02 (ex N 373/2001) — Ayudas a las organizaciones de productores de aceite de oliva****Invitación a presentar observaciones, en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE**

(2002/C 222/03)

Por carta de 17 de julio de 2002, reproducida en la versión lingüística auténtica en las páginas siguientes al presente resumen, la Comisión notificó a España su decisión de incoar el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE en relación con la ayuda antes citada.

Las partes interesadas podrán presentar sus observaciones sobre la ayuda respecto de la cual la Comisión ha incoado el procedimiento en un plazo de un mes a partir de la fecha de publicación del presente resumen y de la carta siguiente, enviándolas a:

Comisión Europea
Dirección General de Agricultura
Dirección de Legislaciones Económicas Agrarias
Despacho: Loi 130 — 5/116
B-1049 Bruxelles/Brussel.
Fax (32-2) 296 21 51.

Dichas observaciones serán comunicadas a España. La parte interesada que presente observaciones podrá solicitar por escrito, exponiendo los motivos de su solicitud, que su identidad sea tratada confidencialmente.

RESUMEN**Procedimiento**

Mediante carta de 5 de junio de 2001, las autoridades españolas notificaron a la Comisión Europea, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 88 del Tratado, las ayudas citadas en la referencia.

Descripción

El proyecto de Decreto regional prevé la concesión de ayudas a las organizaciones de productores de aceite de oliva, en forma de una subvención calculada en función del número de solicitudes de ayudas a la producción de aceite y de aceitunas de mesa, complementaria a la ayuda prevista en el Reglamento (CEE) n° 136/66 del Consejo.

Evaluación de la ayuda

En la fase actual, la Comisión considera que una subvención concedida a las organizaciones de productores, calculada en función del número de solicitudes de ayudas a la producción de aceite y de aceitunas de mesa, constituye una ayuda en el sentido del apartado 1 del artículo 88 del Tratado CE.

En esta fase, sobre la base de la información disponible, estas ayudas son ayudas estatales destinadas a mejorar la situación financiera de las agrupaciones, que no contribuyen de ningún modo al desarrollo del sector. Por consiguiente, estas ayudas deben considerarse ayudas al funcionamiento incompatibles con el mercado común. Además, se trata de ayudas que pueden

interferir los mecanismos que regulan las organizaciones comunes de mercado e infringir dichos mecanismos y, en consecuencia, la normativa comunitaria.

Teniendo en cuenta cuanto se ha expuesto, y en esta fase, las ayudas analizadas no pueden acogerse a ninguna de las excepciones previstas en el apartado 3 del artículo 87 del Tratado CE. La Comisión, por lo tanto, ha decidido incoar el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE.

De conformidad con el artículo 14 del Reglamento (CE) n° 659/1999, toda ayuda concedida ilegalmente podrá ser reclamada a su beneficiario. Además, el gasto relativo a medidas nacionales que afecten directamente a medidas comunitarias podrá no ser subvencionable con cargo al presupuesto del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA).

CARTA

«Por la presente, la Comisión tiene el honor de informar a España de que, tras haber examinado la información proporcionada por sus autoridades sobre la ayuda citada en la referencia, ha decidido incoar el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE.

Procedimiento

Mediante carta de 5 de junio de 2001, las autoridades españolas notificaron a la Comisión Europea, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 88 del Tratado, las ayudas citadas en la referencia.

Mediante fax de 28 de junio y 12 de septiembre de 2001, y de 29 de enero y 29 de abril de 2002, la Comisión pidió información complementaria, que le fue remitida mediante cartas de 27 de julio de 2001 y de 17 de enero, 4 de marzo y 12 de junio de 2002.

En su carta de 12 de junio de 2002, las autoridades españolas afirmaban que la información proporcionada era completa y suficiente y solicitaban a la Comisión que adoptara cuanto antes una decisión respecto a su compatibilidad.

Descripción

El proyecto de Decreto regional prevé la concesión de ayudas a las organizaciones de productores de aceite de oliva que se ocupan de la gestión de las ayudas a la producción de aceite y de aceitunas de mesa y del control; las ayudas adoptan la forma de una subvención calculada en función del número de solicitudes de ayudas transmitidas. Estas organizaciones desempeñan una actividad administrativa desprovista de carácter comercial y no se ocupan de la comercialización del aceite.

Los beneficiarios son cuatro organizaciones que agrupan a 1 500 productores. Estas organizaciones están reconocidas con arreglo al Reglamento nº 136/66/CEE del Consejo, del 22 de septiembre de 1966, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de las materias grasas ⁽¹⁾.

Para las primeras 1 200 solicitudes transmitidas, la ayuda es de 1 500 pesetas españolas (9,02 euros), cifra que puede aumentarse si las solicitudes tratadas han aumentado con relación al año anterior, entre 1 600 pesetas españolas (9,62 euros) y 2 000 pesetas españolas (12,02 euros) por solicitud. A partir de 1 200 solicitudes, la ayuda es de 2 000 pesetas españolas (12,02 euros) por solicitud.

La financiación de estas organizaciones está regulada por el Reglamento nº 136/66/CEE que permite en su artículo 20 *quinquis*, que un 0,8 % del importe de la ayuda a la producción se abone a las organizaciones y uniones reconocidas, con el fin de contribuir a la financiación de los gastos que genera el conjunto de sus actividades.

Según las autoridades españolas, actualmente en la región de Extremadura este importe no se paga en su totalidad a las organizaciones sino que éstas reciben solamente alrededor de 0,6 %. Esta situación se debe a dos factores. En primer lugar, a la diferencia sustancial en el pago de los anticipos del 0,8 %, entre las organizaciones y las uniones de organizaciones, según el Reglamento (CE) nº 647/2001 de la Comisión ⁽²⁾, de 2 euros por solicitud de ayuda, en favor de uniones. España es el único país de la Unión Europea que favorece a las uniones de organizaciones. En segundo lugar, al resultado del reparto del saldo procedente del 0,8 % según el número de solicitudes tratadas por cada organización, lo que genera diferencias entre regiones.

Según las autoridades españolas, las organizaciones de productores de aceite de oliva son un instrumento eficaz para la gestión de las ayudas a la producción, pero en la región de Extremadura la mayoría de las solicitudes de ayuda se efectúan a título individual; las ayudas analizadas permitirían aumentar el número de organizaciones y el número de miembros de las organizaciones existentes.

La duración del régimen de ayudas es indefinida y el presupuesto para el año 2001 es de 20 millones pesetas españolas (120 200 euros).

Evaluación de la ayuda

El apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE prevé que serán incompatibles con el mercado común, en la medida en que afecten a los intercambios entre Estados miembros, las ayudas estatales concedidas por los Estados miembros o por medio de recursos públicos en cualquiera de sus formas, que falseen o que amenacen con falsear la competencia favoreciendo a determinadas empresas o producciones. En el caso que nos ocupa, estas ayudas proporcionan a sus beneficiarios una ventaja que disminuye los gastos que normalmente gravan su presupuesto. Estas ventajas son concedidas por el Estado, o por medio de recursos públicos. Las ayudas son específicas o selectivas en el sentido de que favorecen a determinadas empresas o producciones, a saber, las organizaciones de los productores de aceite de oliva.

Para que sea aplicable el apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE, las ayudas deben además afectar a la competencia y los intercambios entre Estados miembros. Este criterio implica que los beneficiarios de las ayudas han de ejercer una actividad económica. Según la jurisprudencia reiterada a efectos de esta disposición, se considera que los intercambios quedan afectados a partir del momento en que la empresa beneficiaria ejerce una actividad económica que es objeto de intercambios entre los Estados miembros. El simple hecho de que la ayuda refuerce la posición de esta empresa con relación a otras empresas competidoras en los intercambios intracomunitarios permite considerar que quedan afectados los intercambios.

En el caso analizado, los beneficiarios, es decir, las organizaciones de productores de aceite de oliva, están formadas por productores que ejercen una actividad económica, que es objeto de intercambios entre los Estados miembros. Las exportaciones de aceite de oliva virgen de España a la Unión Europea en 2001 fueron de 592 051 000 euros y las importaciones 16 392 000 euros.

En la fase actual, la Comisión ha llegado a la conclusión de que las medidas en curso son ayudas estatales en el sentido del apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE.

La letra c) del apartado 3 del artículo 87 prevé que podrán considerarse compatibles con el mercado común las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de algunas actividades o algunas regiones económicas, cuando no alteren las condiciones de los intercambios en una medida contraria al interés común.

⁽¹⁾ DO 172 de 30.9.1966, p. 3025.

⁽²⁾ DO L 91 de 31.3.2001, p. 44.

El Reglamento 136/66/CEE permite, en su artículo 20 *quinquis*, que un 0,8 % del importe de la ayuda a la producción se abone a las organizaciones y uniones reconocidas con el fin de contribuir a la financiación de los gastos causados por el conjunto de sus actividades. Además, el apartado 2 del artículo 11 del Reglamento (CEE) n° 2261/84 del Consejo, de 17 de julio de 1984, por el que se adoptan las normas generales relativas a la concesión de la ayuda a la producción de aceite de oliva y a las organizaciones de productores⁽³⁾ establece que los Estados miembros productores se asegurarán de que las cantidades destinadas a las uniones y organizaciones de productores son utilizadas por éstas únicamente para la financiación de las actividades que les incumben con arreglo a la legislación comunitaria, entre las cuales se encuentra la presentación de las solicitudes de ayuda de sus miembros. El apartado 3 del artículo 11 prevé que si los importes no se utilizan total o parcialmente de acuerdo con el apartado 2 deberán reembolsarse al Estado miembro y se deducirán de los gastos financiados por el Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola.

La concesión de una ayuda estatal a las organizaciones de productores, suplementaria a la ayuda prevista por la normativa comunitaria, no está prevista por esta normativa y podría causar distorsiones en el mercado y una posible discriminación de los demás productores de la Unión Europea. En efecto, estas organizaciones de productores que se ocupan de la gestión de las ayudas se beneficiarían de dos ayudas: una ayuda comunitaria y una ayuda estatal añadida a la anterior. Aunque la actividad de gestión de las ayudas a la producción no sea en sí misma una actividad económica, puede suponer una ventaja para los productores integrados en las organizaciones beneficiarias de estas ayudas con respecto a productores que no estén integrados en una organización o estén integrados en otras organizaciones que no reciben ayudas estatales. Este será especialmente el caso cuando el importe total de las ayudas percibidas supere los gastos de la gestión de las ayudas y el excedente se destine a los productores o a actividades en beneficio de los productores. Además los productores o las organizaciones que no se benefician de la ayuda estatal podrán verse obligados a sufragar una parte del coste de gestión de las solicitudes de ayuda, a lo que no deberán hacer frente los productores integrados en las organizaciones beneficiarias de las ayudas.

Teniendo en cuenta que las autoridades españolas, en su carta de 12 de junio de 2002, consideraron que la información proporcionada era completa y suficiente y solicitaban a la Comisión que adoptara cuanto antes una decisión respecto a su compatibilidad, la Comisión debe tomar su decisión sobre la base de la información disponible.

Sobre la base de la información disponible, las ayudas previstas parecen ser ayudas estatales destinadas a mejorar la situación financiera de las organizaciones de productores de aceite de

oliva, que no contribuyen de ninguna manera al desarrollo del sector [punto 3.5 de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario⁽⁴⁾]. Por lo tanto, en esta fase, estas ayudas se consideran ayudas al funcionamiento, incompatibles con el mercado común. Este tipo de ayudas no tienen ningún efecto duradero sobre el desarrollo del sector y su efecto inmediato desaparece con la propia medida [véase sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 8 de junio de 1995, en el asunto T-459/93: Siemens S.A. contra Comisión⁽⁵⁾]. Estas ayudas conducen directamente a mejorar las posibilidades de producción y comercialización de los productos por parte de los operadores afectados con respecto a los que no se benefician de ayudas comparables (en el territorio nacional o en otros Estados miembros).

También debe considerarse que estas ayudas a las organizaciones de productores de aceite de aceituna se refieren a un producto, el aceite de oliva, sujeto a una organización común de mercado⁽⁶⁾, que es competencia exclusiva de la Comunidad y en cuyo funcionamiento la capacidad de intervención de los Estados miembros está limitada. La jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia [véase, entre otras, la sentencia de 26 de junio de 1979 en el asunto 177/78: Pigs and Bacon contra Mc Carren⁽⁷⁾] establece que las organizaciones comunes de mercado deben considerarse sistemas completos y exhaustivos que excluyen cualquier competencia de los Estados miembros para adoptar medidas que pudieran establecer excepciones o perjudicarlas. Por lo tanto, y en esta fase, cabe considerar estas ayudas como una infracción a las organizaciones comunes de mercado y en consecuencia a la normativa comunitaria.

Teniendo en cuenta cuanto se ha expuesto, y en esta fase, las ayudas analizadas no pueden acogerse a ninguna de las excepciones previstas en el apartado 3 del artículo 87 del Tratado CE. La Comisión, por lo tanto, ha decidido incoar el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE.

Habida cuenta de las consideraciones expuestas, la Comisión, en el marco del procedimiento del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE, insta a España a que presente sus observaciones y facilite toda la información pertinente para la evaluación de la ayuda/medida en un plazo de un mes a partir de la fecha de recepción de la presente.

La Comisión desea recordar a España el efecto suspensivo del apartado 3 del artículo 88 del Tratado CE y llama su atención sobre el artículo 14 del Reglamento (CE) n° 659/1999 del Consejo, que prevé que toda ayuda concedida ilegalmente podrá recuperarse de su beneficiario. Además, el gasto relativo a medidas nacionales que afecten directamente a medidas comunitarias podrá no ser subvencionable con cargo al presupuesto del FEOGA.».

(4) Véase la nota a pie de página 1.

(5) Recopilación 1995, p. I-1675

(6) Reglamento n° 136/66/CEE.

(7) Recopilación 1979, p. 2161.

(3) DO L 208 de 3.8.1984, p. 3.

AYUDAS ESTATALES — FRANCIA

Ayuda C 55/2002 (ex NN 53/2002) — Ayuda al astillero de reparaciones Soreni (Astilleros)

Invitación a presentar observaciones, en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE

(2002/C 222/04)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

Por carta de 12 de agosto de 2002, reproducida en la versión lingüística auténtica en las páginas siguientes al presente resumen, la Comisión notificó a Francia su decisión de incoar el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE en relación con la ayuda antes citada.

Las partes interesadas podrán presentar sus observaciones sobre la ayuda respecto de la cual la Comisión ha incoado el procedimiento en un plazo de un mes a partir de la fecha de publicación del presente resumen y de la carta siguiente, enviándolas a:

Comisión Europea
Dirección General de Competencia
Registro de ayudas estatales
B-1049 Bruxelles/Brussel
Fax (32-2) 296 12 42.

Dichas observaciones serán comunicadas a Francia. La parte interesada que presente observaciones podrá solicitar por escrito, exponiendo los motivos de su solicitud, que su identidad sea tratada confidencialmente.

RESUMEN

En 1999 el astillero ACH-NC de Le Havre cerró por quiebra. Tres de sus filiales en el sector de las reparaciones navales (Siren, TMTM y MECA Helix) sobrevivieron, pero finalmente quebraron también.

Cuando parecía inevitable que estas empresas de reparación quebraran se procedió a buscar una empresa extranjera que se hiciera cargo de las actividades pero ninguna estuvo finalmente interesada. Para salvar estas actividades de reparación de buques, 12 subcontratistas locales del astillero decidieron crear conjuntamente una nueva empresa, la Société de réparation navale et industrielle (Soreni), para hacerse cargo de las actividades de reparación. En octubre del 2001 el Gobierno francés acordó apoyar la creación de Soreni.

Soreni, que tiene ahora alrededor de 130 empleados, recibirá un capital total de 6,32 millones de euros. Los accionistas proporcionarán 1,75 millones y los 4,57 restantes está previsto que sean facilitados por las autoridades centrales, regionales y locales en forma de subvenciones. La parte de ayuda del Gobierno central francés, de 1,72 millones ya fue desembolsada en diciembre del 2001. Esta ayuda no fue notificada.

Francia justifica la ayuda en el hecho de que las 12 empresas que son ahora accionistas de Soreni estaban también en dificultades debido a su dependencia del bajo nivel de actividades de reparación de buques en Le Havre. Francia también alega que Soreni hereda varias responsabilidades y dificultades estructurales, tales como hacerse cargo de todos los contratos de trabajo, financiación de la jubilación anticipada para los traba-

jadores expuestos al amianto y necesidad de reestructurar la producción.

Francia informa que las inversiones de reestructuración, comercialización, reorganización y formación costarán 3,75 millones de euros, los costes ligados a trabajadores expuestos al amianto serán de 0,318 millones de euros y los sueldos para los primeros tres meses ascienden a 2,277 millones de euros. La suma de estos costes da 6,34 millones de euros, que es la suma que se afirma necesaria para lanzar la empresa.

La Comisión observa que la ayuda a Soreni está ligada a la creación de la empresa. La Comisión también observa que Francia alega que la ayuda debería considerarse como ayuda de reestructuración. La ayuda para la reestructuración de empresas de reparación de buques está contemplada en el artículo 5 del Reglamento sobre ayudas a la construcción naval ⁽¹⁾, en donde se dice que las ayudas destinadas al salvamento y la reestructuración de empresas en crisis podrán considerarse compatibles con el mercado común con carácter excepcional y siempre que cumplan las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y reestructuración de empresas en crisis ⁽²⁾ (en adelante «las directrices»).

El artículo 7 de las directrices declara que una empresa recientemente creada no puede acceder a las ayudas de reestructuración, incluso si su posición financiera inicial fuera insegura. Esto ocurre, por ejemplo, cuando una nueva empresa surge de la liquidación de una empresa previa o se hace cargo simplemente de los activos de la misma.

⁽¹⁾ DO L 202 de 18.7.1998, p. 1.

⁽²⁾ DO C 288 de 9.10.1999, p. 2.

La Comisión considera que Soreni es una empresa recientemente creada surgida de la liquidación de tres empresas previas. Así pues, la Comisión tiene dudas sobre la legalidad de la ayuda de reestructuración, de conformidad con el artículo 7 de las directrices y de que exista alguna otra posibilidad de autorizar la ayuda. Por estas razones la Comisión tiene dudas sobre la compatibilidad de las medidas de ayuda en favor de Soreni. Lo mismo se concluiría si el análisis se basara en las Directrices comunitarias sobre ayudas de Estado de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis de 1994 ⁽³⁾.

En aras de excluir cualquier posibilidad, la Comisión también ha evaluado los criterios necesarios para permitir tal ayuda con arreglo a dichas Directrices pero también de esta forma la Comisión tiene dudas sobre la posibilidad de que Soreni sea viable en un plazo razonable y de que la ayuda sea la mínima necesaria.

De conformidad con el artículo 14 del Reglamento (CE) n° 659/1999 del Consejo, podrá reclamarse al beneficiario la devolución de cualquier ayuda ilegal recibida.

CARTA

«Après avoir examiné les renseignements fournis par les autorités françaises concernant l'aide susmentionnée, la Commission souhaite informer la France de sa décision d'engager la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE.

1. Procédure

- 1) À la suite des informations parues dans la presse selon lesquelles la France aurait accordé des aides destinées à la relance des activités de réparation navale dans le port du Havre, la Commission a demandé des explications à cette dernière par lettre du 21 décembre 2001. Par lettre du 15 mars 2002, les autorités françaises ont répondu à la Commission, l'informant que les pouvoirs publics avaient soutenu financièrement la création d'une entreprise de réparation navale, la Société de réparation navale et industrielle (Soreni). Par lettre du 4 avril 2002, la Commission a informé les autorités françaises qu'elle avait enregistré cette aide comme non notifiée et leur a demandé un complément d'information. Elles ont répondu par lettre du 3 juin 2002 en fournissant des renseignements complémentaires sur les montants d'aide et la création de Soreni.

2. Description détaillée de l'aide

- 2) En 1999, le chantier naval Ateliers et chantiers du Havre — Construction navale (ACH-CN) a fermé pour cause de faillite. Trois filiales d'ACH-CN qui exerçaient des activités de réparation navale (Siren, TMTM et MECA Helix) ont survécu, mais ont rapidement rencontré des difficultés financières du fait de la perte des contrats de sous-traitance que leur accordait auparavant ACH-CN. Les autorités françaises ont indiqué que ces trois entreprises étaient plus tard en redressement judiciaire.

- 3) La recherche d'un repreneur de l'activité de réparation navale havraise fut lancée. Des négociations avec un industriel étranger ont finalement échoué après plusieurs mois de discussion et juste avant que la trésorerie des trois sociétés concernées ne soit totalement exsangue. Afin de sauver ces activités de réparation navale au Havre, douze sous-traitants locaux du chantier de réparation navale ont décidé en 2001 de créer conjointement une entreprise pour les reprendre: Soreni. En octobre 2001, le gouvernement français a accepté de contribuer financièrement à la création de cette entreprise.

- 4) Soreni, qui emploie actuellement environ 125 personnes, bénéficiera selon les autorités françaises d'un apport en capital de 6,32 millions d'euros, ventilés comme suit:

Source	Montant (en millions d'euros)
État français	3,43
Conseil régional de Haute-Normandie	0,38
Conseil général de Seine-Maritime	0,38
Ville du Havre	0,38
Actionnaires de Soreni	1,75
Total	6,32

- 5) Les fonds consentis par les pouvoirs publics consistent en des subventions. Le montant de l'aide s'élève donc à 4,57 millions d'euros sur un total de 6,32 millions d'euros, soit une intensité de l'aide de 72 %. Une partie des aides accordées par le gouvernement français (1,72 million d'euros) a déjà été octroyée en décembre 2001. Ces aides n'ont pas été notifiées.
- 6) Les autorités françaises ont invoqué trois motifs à l'appui de ces aides:
 - a) les trois entreprises qui exerçaient des activités de réparation navale jusqu'à ce que celles-ci soient reprises par Soreni étaient en cours de réorganisation sous le contrôle de la Cour;
 - b) les douze entreprises qui sont à présent les actionnaires de Soreni étaient également en difficulté, car elles dépendaient du niveau des activités de réparation navale au Havre;
 - c) Soreni hérite d'un certain nombre d'éléments de passif et de difficultés structurelles, comme la reprise de tous les contrats de travail, le financement de la préretraite pour les travailleurs ayant été exposés à l'amiante et la nécessité de restructurer la production.
- 7) En outre, les autorités françaises font valoir que la région a énormément souffert de la fermeture du chantier naval ACH-CN et qu'il s'agit d'une zone assistée selon la classification communautaire.

⁽³⁾ DO C 368 de 23.12.1994, p. 12.

- 8) Elles indiquent que la viabilité de la nouvelle entreprise sera assurée sur la base d'un plan qu'elles dénomment à la fois «plan de restructuration» et «plan de relance» (ci-après dénommé «le plan»). Celui-ci suppose des investissements, une réorganisation commerciale et une réorganisation de l'entreprise. Les coûts d'investissement, de commercialisation, de réorganisation et de formation se monteront à 3,75 millions d'euros, les coûts liés aux travailleurs ayant été exposés à l'amiante à 0,318 million d'euros et les salaires correspondant aux trois premiers mois à 2,277 millions d'euros. Le montant total de ces coûts — soit le coût estimé nécessaire au lancement de l'entreprise — est de 6,34 millions d'euros. Les autorités françaises avancent qu'un montant d'aide de 4,57 millions d'euros représente le minimum nécessaire pour couvrir les coûts de relance des activités en question.
- 9) Le plan a pour objectif de restaurer la viabilité commerciale en cinq ans, sur la base notamment des éléments suivants: 1) compétence reconnue des trois entreprises qui exerçaient des activités de réparation navale et de leur personnel; 2) ce nouveau plan est comparable à celui qui était prévu pour l'investisseur étranger, garantissant le réalisme des hypothèses de marché; 3) le président du groupe des repreneurs, bien introduit dans le milieu des armateurs laissait envisager des possibilités de retrouver rapidement une clientèle; 4) le développement du port du Havre induit une activité de réparation annuelle stable.
- ### 3. Appréciation de l'aide
- 10) Conformément au règlement (CE) n° 659/1999, la décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen récapitule les éléments pertinents de fait et de droit, inclut une évaluation préliminaire, par la Commission, de la mesure proposée visant à déterminer si elle présente le caractère d'une aide, et expose les raisons qui incitent à douter de sa compatibilité avec le marché commun.
- 11) Aux termes de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
- 12) En l'espèce, des aides ont été accordées au moyen de ressources d'État et d'autres aides de ce type sont envisagées. Le critère des ressources d'État s'applique également aux aides accordées par des entités régionales ou locales des États membres ⁽⁴⁾. En outre, comme le bénéficiaire des aides déjà versées et des autres aides envisagées est Soreni, les aides en cause favorisent une entreprise.
- 13) Selon la jurisprudence constante de la Cour européenne de justice et du Tribunal européen de première instance, les échanges entre États membres sont affectés lorsque l'entreprise bénéficiaire exerce une activité économique impliquant des échanges entre États membres. Le simple fait que les aides renforcent la position de cette entreprise par rapport à celle de ses concurrents dans les échanges intracommunautaires permet de conclure que ces échanges sont affectés.
- 14) Soreni exerce des activités de réparation navale, lesquelles impliquent des échanges entre États membres. Les aides en question menacent donc de fausser la concurrence et affectent les échanges entre États membres. Par conséquent, la Commission considère au stade actuel que toutes les conditions d'application de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE sont remplies en l'espèce.
- 15) En vertu de l'article 87, paragraphe 3, point e), du traité CE, des catégories d'aides déterminées par décision du Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun.
- 16) La Commission souligne que c'est sur cette base que le Conseil a arrêté, le 29 juin 1998, le règlement (CE) n° 1540/98 établissant de nouvelles règles applicables aux aides à la construction navale ⁽⁵⁾ (ci-après dénommé «le règlement concernant les aides à la construction navale»). Elle constate qu'aux termes de ce règlement, les aides accordées à la construction, à la réparation et à la transformation navales ne sont considérées comme compatibles avec le marché commun que si elles respectent ses dispositions. Elle ajoute que Soreni exerce des activités de réparation navale et qu'elle constitue donc une entreprise exerçant des activités relevant de ce règlement.
- 17) La Commission constate que des aides ont été accordées à Soreni — ou sont envisagées en sa faveur — en relation avec sa création. Elle souligne également que les autorités françaises ont fait référence aux lignes directrices pour les aides au sauvetage et à la restructuration de 1999 et ont à plusieurs reprises dénommé le plan en faveur de Soreni «plan de restructuration». Or, les aides à la restructuration accordées à des entreprises de réparation navale relèvent de l'article 5 du règlement concernant les aides à la construction navale.
- 18) Conformément à cet article, les aides au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté peuvent exceptionnellement être jugées compatibles avec le marché commun, à condition de respecter les lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté ⁽⁶⁾ (ci-après dénommées «les lignes directrices pour les aides à la restructuration»). Cet article prévoit en outre un certain nombre de conditions supplémentaires pour l'autorisation des aides à la restructuration.
- 19) Le point 7 des lignes directrices pour les aides à la restructuration dispose qu'aux fins desdites lignes directrices, une entreprise nouvellement créée n'est pas éligible aux aides au sauvetage et à la restructuration, même si sa position financière initiale est précaire. C'est notamment le cas lorsque l'entreprise nouvelle est issue de la liquidation d'une entreprise préexistante, ou de la reprise de ses seuls actifs.
- 20) La création par une entreprise d'une filiale instituée seulement pour recevoir ses actifs et éventuellement son passif constitue la seule exception. Dans ce cas, il ne s'agit pas de la création d'une entreprise nouvelle.

⁽⁴⁾ Arrêt de la Cour de justice dans l'affaire 248/84, Allemagne contre Commission, Recueil 1987, p. 4013.

⁽⁵⁾ JO L 202 du 18.7.1998, p. 1.

⁽⁶⁾ JO C 288 du 9.10.1999, p. 2.

- 21) La Commission considère au stade actuel que Soreni est une entreprise nouvellement créée, issue des trois entreprises préexistantes. Au regard du point 7 des lignes directrices pour les aides à la restructuration et, partant, du règlement concernant les aides à la construction navale, elle doute donc au stade actuel que des aides à la restructuration puissent être autorisées en l'espèce. Sa conclusion serait la même si son analyse était fondée sur les lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté de 1994 ⁽⁷⁾. Bien que moins explicites, ces lignes directrices s'appliquent également aux entreprises existantes faisant l'objet d'un sauvetage ou d'une restructuration, et non aux entreprises nouvellement créées (point 2.1).
- 22) En ce qui concerne les autres possibilités d'autorisation des aides en question, ou du moins d'une partie d'entre elles, Le Havre est une zone assistée conformément à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE. En théorie, certains investissements pourraient donc donner lieu à des aides en application de l'article 7 du règlement concernant les aides à la construction navale. Cependant, la Commission n'a pas reçu suffisamment d'informations pour pouvoir examiner les investissements prévus au regard de cet article et doute donc que d'éventuelles aides aux investissements puissent être compatibles avec le traité.
- 23) Elle doute même d'avoir une autre possibilité d'autoriser les aides en question. Pour ces raisons, la Commission émet des réserves quant à la compatibilité avec le traité des aides accordées à Soreni ou envisagées en sa faveur.
- 24) Par souci d'exhaustivité, la Commission a également examiné si les conditions d'autorisation prévues par les lignes directrices pour les aides à la restructuration de 1999 étaient satisfaites. Conformément à la section 3.2.2 de ces lignes directrices, l'octroi d'aides à la restructuration est conditionné à la mise en œuvre d'un plan de restructuration qui doit être validé par la Commission. Ce plan doit être présenté à cette dernière avec toutes les précisions nécessaires. Il prévoit notamment des mesures destinées à atténuer les conséquences défavorables des aides pour les concurrents. À cette fin, il doit être accompagné d'une étude de marché.
- 25) À la demande de la Commission, les autorités françaises ont présenté un plan en faveur de SORENI, qui — comme indiqué plus haut — a été dénommé à la fois «plan de restructuration» et «plan de relance». Cependant, sur la base des informations dont elle dispose concernant ce plan, la Commission formule des réserves quant à la probabilité que la viabilité à long terme de SORENI puisse être rétablie dans un délai raisonnable et sur la base d'hypothèses réalistes, comme le prévoient les lignes directrices. Ses réserves sont fondées, d'une part, sur le fait que l'investisseur étranger qui devait reprendre les activités de réparation navale y a renoncé et, d'autre part, sur le fait que le plan ne contient pas d'étude de marché ni de prévisions des ventes ou d'estimations des coûts pour les années à venir.
- 26) La Commission doute également que les aides soient réduites au minimum nécessaire, et en particulier que le bénéficiaire contribue de manière importante au plan de restructuration sur ses propres ressources, ce qui constitue également une condition d'autorisation des aides à la restructuration. Elle constate en outre l'absence d'étude de marché. Enfin, elle indique que le règlement concernant les aides à la construction navale souligne que seules les aides à la restructuration peuvent exceptionnellement être jugées compatibles avec le marché commun.
- 27) Les aides en question soulèvent ce type de doutes, même lorsqu'elles sont appréciées au regard des lignes directrices de 1994.
- 28) Par conséquent, outre les réserves précitées, la Commission doute au stade actuel — sur la base des renseignements fournis par les autorités françaises dans le plan en faveur de Soreni — de la compatibilité des aides accordées ou envisagées.

4. Conclusion

- 29) Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission doute que les aides accordées à Soreni ou envisagées en sa faveur soient compatibles avec le règlement concernant les aides à la construction navale et, partant, avec l'article 87, paragraphe 3, point e), du traité CE.
- 30) À la lumière des considérations qui précèdent, la Commission, dans le cadre de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, invite les autorités françaises à lui présenter leurs observations et à lui fournir toute information pouvant être utile à l'appréciation de l'aide, dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la présente lettre. Elle les invite également à transmettre immédiatement une copie de la présente au bénéficiaire de l'aide.
- 31) La Commission rappelle aux autorités françaises l'effet suspensif de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE et attire leur attention sur l'article 14 du règlement (CE) n° 659/1999, qui dispose que toute aide illégale peut être récupérée auprès de son bénéficiaire.»

⁽⁷⁾ JO C 368 du 23.12.1994, p. 12. L'article 5 du règlement concernant les aides à la construction navale renvoie aux «Lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté» et mentionne dans une note de bas de page les lignes directrices pour les aides à la restructuration de 1994. La Commission considère que cette disposition doit être interprétée comme faisant référence aux lignes directrices pour les aides à la restructuration telles qu'elles étaient applicables au moment des faits. Par conséquent, en l'espèce, les nouvelles lignes directrices de 1999 s'appliquent aux aides accordées après leur publication.

Notificación previa de una operación de concentración
(asunto COMP/M.2897 — SITA SA/Sydskraft y SITA Sverige AB/Ecoplus)

(2002/C 222/05)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

1. El 10 de septiembre de 2002 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento (CEE) n° 4064/89 del Consejo ⁽¹⁾, modificado por el Reglamento (CE) n° 1310/97 ⁽²⁾, la Comisión recibió la notificación de un proyecto de concentración por el que las empresas SITA SA, perteneciente al Grupo francés Suez Lyonnaise, y Sydkraft AB («Sydkraft»), perteneciente al Grupo alemán E.ON, adquieren el control conjunto, a efectos de lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 del artículo 3 del citado Reglamento, de la empresa SITA Sverige AB («SITA Sverige»), a través de un acuerdo de accionistas («la concentración SITA Sverige»).

2. Ámbito de actividad de las empresas implicadas:

- Sydkraft: principalmente generación, distribución y venta de electricidad; producción de energía a partir de desechos (producción de calor) a través de su filial Ecoplus,
- SITA SA: recogida y tratamiento de desechos,
- SITA Sverige: recogida y tratamiento de desechos en Suecia,
- Ecoplus: actualmente activa en el sector de producción de energía a partir de desechos.

3. Tras haber realizado un examen preliminar, la Comisión considera que la operación notificada podría entrar en el ámbito de aplicación del Reglamento (CEE) n° 4064/89. No obstante, se reserva la posibilidad de tomar una decisión definitiva sobre este punto.

4. La Comisión insta a los terceros interesados a que le presenten sus observaciones eventuales con respecto al proyecto de concentración.

Las observaciones deberán obrar en poder de la Comisión en un plazo máximo de diez días naturales a contar desde el día siguiente a la fecha de la presente publicación. Podrán enviarse por fax [(32-2) 296 43 01/296 72 44] o por correo, indicando la referencia COMP/M.2897 — SITA SA/Sydkraft y SITA Sverige AB/Ecoplus, a la dirección siguiente:

Comisión Europea
Dirección General de Competencia
Dirección B — Grupo operativo de operaciones de concentración
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel.

⁽¹⁾ DO L 395 de 30.12.1989, p. 1; rectificación en el DO L 257 de 21.9.1990, p. 13.

⁽²⁾ DO L 180 de 9.7.1997, p. 1; rectificación en el DO L 40 de 13.2.1998, p. 17.

No oposición a una concentración notificada**(Asunto COMP/M.2863 — Morgan Stanley/Olivetti/Telecom Italia/Tiglio)**

(2002/C 222/06)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

El 30 de agosto de 2002 la Comisión decidió no oponerse a la concentración de referencia y declararla compatible con el mercado común. Esta decisión se basa en lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 del artículo 6 del Reglamento (CEE) n° 4064/89 del Consejo. El texto completo de la decisión está disponible únicamente en italiano y se hará público después de liberado de cualquier secreto comercial que pueda contener. Estará disponible:

- en versión papel en las oficinas de ventas de la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas (véase la lista en la última página),
- en formato electrónico en la versión «CIT» de la base de datos CELEX, con el número de documento 302M2863. CELEX es el sistema de documentación automatizado de la legislación de la Comunidad Europea.

Podrá obtenerse más información en la dirección siguiente:

EUR-OP

Información, Mercadotecnia y Relaciones Públicas

2, rue Mercier

L-2985 Luxembourg

Tel. (35 2) 29 29-427 18, fax (35 2) 29 29-427 09.

No oposición a una concentración notificada**(Asunto COMP/M.2936 — TMI/Darfon/JV)**

(2002/C 222/07)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

El 10 de septiembre de 2002 la Comisión decidió no oponerse a la concentración de referencia y declararla compatible con el mercado común. Esta decisión se basa en lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 del artículo 6 del Reglamento (CEE) n° 4064/89 del Consejo. El texto completo de la decisión está disponible únicamente en inglés y se hará público después de liberado de cualquier secreto comercial que pueda contener. Estará disponible:

- en versión papel en las oficinas de ventas de la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas (véase la lista en la última página),
- en formato electrónico en la versión «CEN» de la base de datos CELEX, con el número de documento 302M2936. CELEX es el sistema de documentación automatizado de la legislación de la Comunidad Europea.

Podrá obtenerse más información en la dirección siguiente:

EUR-OP

Información, Mercadotecnia y Relaciones Públicas

2, rue Mercier

L-2985 Luxembourg

Tel. (35 2) 29 29-427 18, fax (35 2) 29 29-427 09.

No oposición a una concentración notificada
(Asunto COMP/M.2937 — Questor Bermuda/Teksid)

(2002/C 222/08)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

El 13 de septiembre de 2002 la Comisión decidió no oponerse a la concentración de referencia y declararla compatible con el mercado común. Esta decisión se basa en lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 del artículo 6 del Reglamento (CEE) nº 4064/89 del Consejo. El texto completo de la decisión está disponible únicamente en inglés y se hará público después de liberado de cualquier secreto comercial que pueda contener. Estará disponible:

- en versión papel en las oficinas de ventas de la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas (véase la lista en la última página),
- en formato electrónico en la versión «CEN» de la base de datos CELEX, con el número de documento 302M2937. CELEX es el sistema de documentación automatizado de la legislación de la Comunidad Europea.

Podrá obtenerse más información en la dirección siguiente:

EUR-OP

Información, Mercadotecnia y Relaciones Públicas

2, rue Mercier

L-2985 Luxembourg

Tel. (35 2) 29 29-427 18, fax (35 2) 29 29-427 09.

III

(Informaciones)

COMISIÓN

Concurso convocado por la República Helénica de conformidad con la letra d) del apartado 1 del artículo 4 del Reglamento (CEE) n° 2408/92 del Consejo para la explotación de servicios aéreos regulares sujetos a obligaciones de servicio público

(2002/C 222/09)

1. Introducción

En virtud de lo dispuesto en la letra a) del apartado 1 del artículo 4 del Reglamento (CEE) n° 2408/92 del Consejo, de 23 de julio de 1992, relativo al acceso de las compañías aéreas de la Comunidad a las rutas aéreas intracomunitarias, el Gobierno griego ha decidido imponer, a partir del 1 de febrero de 2003, obligaciones de servicio público en los servicios aéreos regulares que se enumeran a continuación:

- Atenas–Kithira,
- Atenas–Naxos,
- Atenas–Paros,
- Atenas–Karpathos,
- Atenas–Sitia,
- Atenas–Skiathos,
- Salónica–Skiros,
- Salónica–Corfú,
- Rodas–Kos–Leros–Astipalaia,
- Corfú–Aktio–Cefalonia–Zákinthos,
- Alexandroupolis–Sitia,
- Aktio–Sitia.

Las normas correspondientes a dichas obligaciones de servicio público se publicaron en el *Diario Oficial de las Comunidades Europeas* C 164 de 10 de julio de 2002, p. 16.

En la medida en que, a 30 de diciembre de 2002, ninguna compañía aérea haya notificado al Servicio de Aviación Civil su intención de operar servicios regulares en una o varias de las rutas anteriormente mencionadas a partir del 1 de febrero de 2003, de conformidad con las obligaciones de servicio público impuestas y sin compensación económica alguna, Grecia ha decidido, con arreglo al procedimiento de la letra d) del apartado 1 del artículo 4 del Reglamento mencionado, limitar el acceso a una o varias de esas rutas (con arreglo a lo dispuesto en el apartado siguiente) a una única compañía durante tres años y conceder mediante concurso el derecho de explotar dichos servicios aéreos a partir del 1 de febrero de 2003.

2. Objeto del concurso

El derecho exclusivo a prestar servicios aéreos regulares, a partir del 1 de febrero de 2003, durante tres años en las rutas que se enumeran a continuación, de conformidad con las obligaciones de servicio público.

- Atenas–Kithira,
- Atenas–Naxos,
- Atenas–Paros,
- Atenas–Karpathos,
- Atenas–Sitia,
- Atenas–Skiathos,
- Salónica–Skiros,
- Salónica–Corfú,
- Rodas–Kos–Leros–Astipalaia,
- Corfú–Aktio–Cefalonia–Zákinthos,
- Alexandroupolis–Sitia,
- Aktio–Sitia.

Los vuelos en cuestión deberán efectuarse de conformidad con las obligaciones de servicio público impuestas para dichas rutas, publicadas en el *Diario Oficial de las Comunidades Europeas* C 164 de 10 de julio de 2002, p. 16.

Cada una de las rutas indicadas deberá ser objeto de una oferta por separado para la realización de vuelos regulares.

Téngase presente que, habida cuenta de las peculiaridades de los servicios que deberán prestarse, las compañías aéreas deberán poder demostrar que el personal de cabina que atenderá a los pasajeros en las rutas mencionadas habla y entiende el griego.

3. Participación en el concurso

La participación está abierta a todas las compañías aéreas titulares de una licencia de explotación válida expedida por un Estado miembro en virtud del Reglamento (CEE) n° 2407/92 del Consejo, de 23 de julio de 1992, sobre la concesión de licencias a las compañías aéreas.

No se admitirán a concurso las compañías aéreas a las que se apliquen las restricciones e incompatibilidades contempladas en la Ley nº 3021/02 (ΦΕΚ 143/A-19 de junio de 2002) relativa a las restricciones a la celebración de convenios públicos con personas titulares de empresas de medios de comunicación o participantes en las mismas y otras disposiciones.

4. Procedimiento del concurso

El presente concurso se ajusta a lo dispuesto en las letras d) a i) del apartado 1 del artículo 4 del Reglamento (CEE) nº 2408/92.

Si el concurso resultara infructuoso o no se presentaran ofertas, se convocará un nuevo concurso a la mayor brevedad posible. En caso de urgencia el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Grecia podrá adoptar las medidas necesarias al objeto de satisfacer las necesidades vitales en materia de transporte aéreo de una región remota, a condición de que tales medidas sean conformes a los principios de no discriminación, proporcionalidad y transparencia y no estén vigentes durante un período superior a seis meses.

Los concursantes estarán vinculados por su oferta hasta que se adjudique el concurso.

5. Documentación para participar en el concurso

La documentación completa para participar en el concurso, que consta del pliego de condiciones, los documentos de apoyo y otras informaciones puede obtenerse gratuitamente en el Servicio de Aviación Civil, Dirección de Operaciones Aéreas, Vasileos Georgiou 1, GR-166 04 Elliniko, tel. (30-10) 891 61 49 o 891 63 38, fax (30-10) 894 71 01.

6. Compensación económica

Las ofertas presentadas por las empresas concursantes especificarán la cantidad trimestral solicitada en concepto de compensación por explotación del servicio correspondiente durante un período de tres años a partir de la fecha de inicio de explotación prevista (con un desglose anual de las cuentas, conforme a lo indicado en el pliego de condiciones). La compensación económica será abonada en un plazo de 30 días contados a partir de la fecha de emisión de la factura correspondiente por parte de la compañía aérea, mediante transferencia a una cuenta abierta por esta en una institución bancaria reconocida en Grecia. La cantidad exacta de la compensación concedida se determinará sobre la base de los vuelos realmente efectuados, de un certificado del órgano competente del Servicio de aviación civil que corrobore el cumplimiento correcto de las condiciones del contrato y de la cantidad proporcional de la compensación debida.

7. Criterio de selección

La selección entre las compañías aéreas que se consideren capacitadas para prestar los servicios relativos a cada una de las rutas a las que hace referencia el presente concurso sin trabas y con arreglo a los requisitos establecidos se basará en el criterio del importe más bajo solicitado en calidad de compensación financiera total en relación con la ruta de que se trate.

8. Duración, modificación y resolución del contrato

El contrato entrará en vigor el 1 de febrero de 2003 y expirará el 31 de enero de 2006.

Será posible introducir modificaciones en el contrato, siempre y cuando estas sean compatibles con las obligaciones de servicio público publicadas en el *Diario Oficial de las Comunidades Europeas* C 146 de 10 de julio de 2002, p. 16. Las modificaciones del contrato deberán hacerse por escrito.

En caso de variación imprevista de las condiciones de explotación, el importe de la compensación podrá ser objeto de revisión.

El contrato podrá ser resuelto por cada una de las partes con un preaviso de seis meses. Cuando existan motivos graves para ello, y siempre y cuando la compañía aérea haya incumplido el contrato por lo que respecta a las obligaciones de servicio público impuestas, la entidad adjudicadora podrá rescindir el contrato antes de que transcurra dicho plazo.

La resolución del contrato será automática en caso de suspensión o revocación de la licencia de explotación o del certificado de operador del adjudicatario.

9. Sanciones por incumplimiento del contrato

La compañía aérea será responsable de la correcta ejecución de las cláusulas del contrato.

El número de vuelos anulados por motivos directamente imputables a la compañía no deberá superar el 2 % de los vuelos previstos al año. En tales casos, se procederá a la reducción proporcional del importe de la compensación económica.

Salvo fuerza mayor, el incumplimiento total o parcial de las obligaciones que se derivan del contrato (excepto en el caso de que el número de vuelos anulados no supere el 2 % de los vuelos previstos cada año, conforme a lo indicado en el párrafo anterior) podrá dar lugar a la aplicación, por parte de la entidad adjudicadora, de las sanciones que a continuación se indica:

- en los casos en que el número de vuelos anulados en una ruta dada supere el 2 % del total de vuelos previstos cada año, la compensación económica pagadera en relación con dicha ruta (por los vuelos efectivamente realizados durante el trimestre en cuestión) también será objeto de una reducción por un importe equivalente al que habría correspondido si los vuelos se hubieran realizado con normalidad,
- en los casos en que el incumplimiento esté relacionado con el número de plazas semanales efectivamente ofrecidas durante el trimestre, la compensación económica sufrirá una reducción proporcional al número de plazas no ofrecidas,
- en los casos en que el incumplimiento esté relacionado con las tarifas aplicadas, la compensación económica sufrirá una reducción proporcional a la diferencia con las tarifas previstas,

- en cualquier otro caso de incumplimiento de las cláusulas del contrato, se impondrá la multa prevista en la reglamentación aeroportuaria,
- en caso de que el adjudicatario cometa la misma contravención por tercera vez en un mismo trimestre en relación con una ruta determinada, podrá exigírsele, a modo de sanción complementaria de las penalizaciones anteriormente enumeradas, la totalidad o parte de la garantía de correcta ejecución del contrato relativo a la ruta de que se trate, tras notificación escrita del Servicio de aviación civil y en la medida en que no logre justificar suficientemente que no es responsable. La imposición de las sanciones mencionadas en el presente apartado se hará teniendo en consideración la gravedad de la contravención constatada y con arreglo al principio de proporcionalidad.

La entidad adjudicadora podrá exigir, asimismo, la indemnización a que haya lugar por los daños sufridos.

10. Presentación de ofertas

Las ofertas deberán hacerse en cinco ejemplares y enviarse por correo certificado con acuse de recibo o entregarse directamente contra un recibo, en la dirección siguiente:

Ministry of Transport and Communications
Civil Aviation Authority
Directorate-General for Air Transport
Directorate for Air Operations
Sections A and B
Dirección postal: Vasileos Georgiou 1
GR-166 04 Elliniko.

El plazo para la presentación de ofertas expirará a las 12 horas del trigésimo segundo día siguiente a la fecha de publicación del presente concurso en el *Diario Oficial de las Comunidades Europeas*. La recepción de las ofertas remitidas por correo deberá producirse antes de la expiración del plazo, de lo que dará fe el acuse de recibo.

11. Validez del concurso

La validez del presente concurso estará supeditada a la condición de que a 30 de diciembre de 2002 ninguna compañía aérea comunitaria haya manifestado (mediante la presentación de un programa de explotación ante el Servicio de aviación civil) su intención de efectuar, a partir del 1 de febrero de 2003, vuelos regulares en una o en varias de las rutas previamente mencionadas, de conformidad con las obligaciones de servicio público impuestas y sin solicitar compensación económica alguna.

En cualquier caso, el concurso seguirá siendo válido para las rutas que a 29 de noviembre de 2002 no hayan sido objeto de manifestación de interés alguna por parte de una compañía aérea en los términos anteriormente establecidos.

Explotación de servicios aéreos regulares

Concurso convocado por la República Helénica de conformidad con la letra d) del apartado 1 del artículo 4 del Reglamento (CEE) n° 2408/92 del Consejo para la explotación de servicios aéreos regulares sujetos a obligaciones de servicio público

(2002/C 222/10)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

1. **Introducción:** En virtud de lo dispuesto en la letra a) del apartado 1 del artículo 4 del Reglamento (CEE) n° 2408/92 del Consejo, de 23 de julio de 1992, relativo al acceso de las compañías aéreas de la Comunidad a las rutas aéreas intracomunitarias, el Gobierno griego ha decidido imponer, a partir del 1 de febrero de 2003, obligaciones de servicio público en los servicios aéreos regulares que se enumeran a continuación:

- Atenas–Kithira,
- Atenas–Naxos,
- Atenas–Paros,
- Atenas–Karpáthos,
- Atenas–Sitia,

- Atenas–Skiathos,
- Tesalónica–Skiros,
- Tesalónica–Corfú,
- Rodas–Kos–Leros–Astipalaia,
- Corfú–Aktio–Cefalonia–Zákinthos,
- Alexandroupolis–Sitia,
- Aktio–Sitia.

Las normas correspondientes a dichas obligaciones de servicio público se publicaron en el *Diario Oficial de las Comunidades Europeas* C 164/16 de 10 de julio de 2002.

En la medida en que, a 30 de diciembre de 2002, ninguna compañía aérea haya notificado al Servicio de Aviación Civil su intención de operar servicios regulares en una o varias de las rutas anteriormente mencionadas a partir del 1 de febrero de 2003, de conformidad con las obligaciones de servicio público impuestas y sin compensación económica alguna, Grecia ha decidido, con arreglo al procedimiento de la letra d) del apartado 1 del artículo 4 del Reglamento mencionado, limitar al acceso a una o varias de las esas rutas (con arreglo a lo dispuesto en el apartado siguiente) a una única compañía durante tres años y conceder mediante concurso el derecho de explotar dichos servicios aéreos a partir del 1 de febrero de 2003.

2. **Objeto del concurso:** El derecho exclusivo a prestar servicios aéreos regulares, a partir del 1 de febrero de 2003, durante tres años en las rutas que se enumeran a continuación, de conformidad con las obligaciones de servicio público.

- Atenas–Kithira,
- Atenas–Naxos,
- Atenas–Paros,
- Atenas–Karpathos,
- Atenas–Sitia,
- Atenas–Skiathos,
- Tesalónica–Skiros,
- Tesalónica–Corfú,
- Rodas–Kos–Leros–Astipalaia,
- Corfú–Aktio–Cefalonia–Zákinthos,
- Alexandroupolis–Sitia,
- Aktio–Sitia.

Los vuelos en cuestión deberán efectuarse de conformidad con las obligaciones de servicio público impuestas para dichas rutas, publicadas en el *Diario Oficial de las Comunidades Europeas* n° C 164/16 de 10 de julio de 2002.

Cada una de las rutas indicadas deberá ser objeto de una oferta por separado para la realización de vuelos regulares.

Téngase presente que, habida cuenta de las peculiaridades de los servicios que deberán prestarse, las compañías aéreas deberán poder demostrar que el personal de cabina que atenderá a los pasajeros en las rutas mencionadas habla y entiende el griego.

3. **Participación:** La participación está abierta a todas las compañías aéreas titulares de una licencia de explotación válida expedida por un Estado miembro en virtud del Reglamento (CEE) n° 2407/92 del Consejo, de 23 de julio de 1992, sobre la concesión de licencias a las compañías aéreas.

No se admitirán a concurso las compañías aéreas a las que se apliquen las restricciones e incompatibilidades contempladas en la Ley N.3021.02 (ØEK 143/A - 19.6.2002) relativa a las restricciones a la celebración de convenios públicos con personas titulares de empresas de medios de comunicación o participantes en las mismas y otras disposiciones.

4. **Procedimiento del concurso:** El presente concurso se ajusta a lo dispuesto en las letras d) a i) del apartado 1 del artículo 4 del Reglamento (CEE) n° 2408/92.

Si el concurso resultara infructuoso o no se presentaran ofertas, se convocará un nuevo concurso a la mayor brevedad posible. En caso de urgencia el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Grecia podrá adoptar las medidas necesarias al objeto de satisfacer las necesidades vitales en materia de transporte aéreo de una región remota, a condición de que tales medidas sean conformes a los principios de no discriminación, proporcionalidad y transparencia y no estén vigentes durante un período superior a seis meses.

Los concursantes estarán vinculados por su oferta hasta que se adjudique el concurso.

5. **Documentación para participar en el concurso:** La documentación completa para participar en el concurso, que consta del pliego de condiciones, los documentos de apoyo y otras informaciones puede obtenerse gratuitamente en el Servicio de Aviación Civil, Dirección de Operaciones Aéreas, Vas. Georgiou 1, GR-16604 Elliniko, tel. (30 1) 891 61 49, fax (30 1) 894 71 01.

6. **Compensación económica:** Las ofertas presentadas por las empresas concursantes especificarán la cantidad trimestral solicitada en concepto de compensación por explotación del servicio correspondiente durante un período de tres años a partir de la fecha de inicio de explotación prevista (con un desglose anual de las cuentas, conforme a lo indicado en el pliego de condiciones). La compensación económica será abonada en un plazo de 30 días contados a partir de la fecha de emisión de la factura correspondiente por parte de la compañía aérea, mediante transferencia a una cuenta abierta por esta en una institución bancaria reconocida en Grecia. La cantidad exacta de la compensación concedida se determinará sobre la base de los vuelos realmente efectuados, de un certificado del órgano competente del Servicio de Aviación Civil que corrobore el cumplimiento correcto de las condiciones del contrato y de la cantidad proporcional de la compensación debida.

7. **Criterios de selección:** La selección entre las compañías aéreas que se consideren capacitadas para prestar los servicios relativos a cada una de las rutas a las que hace referencia el presente concurso sin trabas y con arreglo a los requisitos establecidos se basará en el criterio del importe más bajo solicitado en calidad de compensación financiera total en relación con la ruta de que se trate.

8. **Duración, modificación y resolución del contrato:** El contrato entrará en vigor el 1 de febrero de 2003 y expirará el 31 de enero de 2006.

Será posible introducir modificaciones en el contrato, siempre y cuando estas sean compatibles con las obligaciones de servicio público en el *Diario Oficial de las Comunidades Europeas* n° C 164/16 de 10.7.2002. Las modificaciones del contrato deberán hacerse por escrito.

En caso de variación imprevista de las condiciones de explotación, el importe de la compensación podrá ser objeto de revisión.

El contrato podrá ser resuelto por cada una de las partes con un preaviso de seis meses. Cuando existan motivos graves para ello, y siempre y cuando la compañía aérea haya incumplido el contrato por lo que respecta a las obligaciones de servicio público impuestas, la entidad adjudicadora podrá rescindir el contrato antes de que transcurra dicho plazo.

La resolución del contrato será automática en caso de suspensión o renovación de la licencia de explotación o del certificado de operador del adjudicatario.

9. **Sanciones por incumplimiento del contrato:** La compañía aérea será responsable de la correcta ejecución de las cláusulas del contrato.

El número de vuelos anulados por motivos directamente imputables a la compañía no deberá superar el 2 % de los vuelos previstos al año. En tales casos, se procederá a la reducción proporcional del importe de la compensación económica.

Salvo fuerza mayor, el incumplimiento total o parcial de las obligaciones que se derivan del contrato (excepto en el caso de que el número de vuelos anulados no supere el 2 % de los vuelos previstos cada año, conforme a lo indicado en el párrafo anterior) podrá dar lugar a la aplicación, por parte de la entidad adjudicadora, de las sanciones que a continuación se indica:

- en los casos en que el número de vuelos anulados en una ruta dada supere el 2 % del total de vuelos previstos cada año, la compensación económica pagadera en relación con dicha ruta (por los vuelos efectivamente realizados durante el trimestre en cuestión) también será objeto de una reducción por un importe equivalente al que habría correspondido si los vuelos se hubieran realizado con normalidad,
- en los casos en que el incumplimiento esté relacionado con el número de plazas semanales efectivamente ofrecidas durante el trimestre, la compensación económica sufrirá una reducción proporcional al número de plazas no ofrecidas,

- en los casos en que el incumplimiento esté relacionado con las tarifas aplicadas, la compensación económica sufrirá una reducción proporcional a la diferencia con las tarifas previstas,
- en cualquier otro caso de incumplimiento de las cláusulas del contrato, se impondrá la multa prevista en la reglamentación aeroportuaria,
- en caso de que el adjudicatario cometa la misma contravención por tercera vez en un mismo trimestre en relación con una ruta determinada, podrá exigírsele, a modo de sanción complementaria de las penalizaciones anteriormente enumeradas, la totalidad o parte de la garantía de correcta ejecución del contrato relativo a la ruta de que se trate, tras notificación escrita del Servicio de Aviación Civil y en la medida en que no logre justificar suficientemente que no es responsable. La imposición de las sanciones mencionadas en el presente apartado se hará teniendo en consideración la gravedad de la contravención constatada y con arreglo al principio de proporcionalidad.

La entidad adjudicadora podrá exigir, asimismo, la indemnización a que haya lugar por los daños sufridos.

10. **Presentación de ofertas:** Las ofertas deberán hacerse en cinco ejemplares y enviarse por correo certificado con acuse de recibo o entregarse directamente contra un recibo, en la siguiente dirección:

Ministry of Transport and Communications, Civil Aviation Authority, Directorate-General for Air Transport, Directorate for Air Operations, Sections A and B, Vassileos Georgiou 1, GR-16604 Elliniko.

El plazo para la presentación de ofertas expirará a las 12 horas del trigésimo segundo día siguiente a la fecha de publicación del presente concurso en el *Diario Oficial de las Comunidades Europeas*. La recepción de las ofertas remitidas por correo deberá producirse antes de la expiración del plazo, de lo que dará fe el acuse de recibo.

11. **Validez del concurso:** La validez del presente concurso estará supeditada a la condición de que a 30 de diciembre de 2002 ninguna compañía aérea comunitaria haya manifestado (mediante la presentación de un programa de explotación ante el Servicio de Aviación Civil) su intención de efectuar, a partir del 1 de febrero de 2003, vuelos regulares en una o en varias de las rutas previamente mencionadas, de conformidad con las obligaciones de servicio público impuestas y sin solicitar compensación económica alguna.

En cualquier caso, el concurso seguirá siendo válido para las rutas que a 29 de noviembre de 2002 no hayan sido objeto de manifestación de interés alguna por parte de una compañía aérea en los términos anteriormente establecidos.